

Los instrumentos legales de la renegociación
del contrato de Aguas Argentinas (1997-99)

Gustavo Ferro

Texto de Discusión N° 23

ISBN N° 987-519-078-0

(Diciembre 2000)

CEER

Centro de Estudios Económicos de la Regulación

Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa

Lima 717, 1° piso

C1053AAO Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 54-11-43797693

Fax: 54-11-43797588

E-mail: ceer@uade.edu.ar

<http://www.uade.edu.ar/economia/ceer>

(Por favor, mire las últimas páginas de este documento por una lista de los Textos de Discusión y de la Working Paper Series del CEER e información concerniente a suscripciones).

El Centro de Estudios de Economía de la Regulación (CEER), es una organización dedicada al análisis de la regulación de los servicios públicos. El CEER es apoyado financieramente por el Banco Mundial, los Entes Reguladores de Agua, Telecomunicaciones y Electricidad de la República Argentina, y la Universidad Argentina de la Empresa (Buenos Aires), donde el CEER tiene su sede.

Autoridades del CEER:

Ing. Eduardo Cevallo, Presidente Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Lic. Enrique Devoto, Vicepresidente Primero Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)-Dr. Roberto Catalán, Presidente Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Dr. Antonio Estache, World Bank Institute, Dr. Carlos Newland, Rector Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Dr. Omar Chisari, Director Instituto de Economía (UADE).

Director Ejecutivo: Dr. Martín Rodríguez Pardina

Investigadores: Lic. Gustavo Ferro.

Ayudante de Investigación: Lic. Christian Ruzzier.

CEER Serie de Textos de Discusión
Los instrumentos legales de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas (1997-99)
Gustavo Ferro
Texto de Discusión N° 23
(Diciembre 2000)
JEL N°: J9

Pertenencia profesional del autor: Gustavo Ferro, CEER y Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa, Buenos Aires gferro@uade.edu.ar

CEER
Centro de Estudios Económicos de la Regulación
Departamento de Economía y Finanzas, Universidad Argentina de la Empresa
Lima 717, 1° piso
C1053AAO Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 54-11-43797693
Fax: 54-11-43797588
E-mail: ceer@uade.edu.ar
<http://www.uade.edu.ar/economia/ceer>.

Los instrumentos legales de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas (1997-99)

I-Introducción: Regulación comparada

Debe distinguirse el esquema regulatorio, entre el período anterior a la renegociación y el posterior a él. La renegociación del contrato original firmado en 1993, comenzó en 1997 y concluyó en 1999. No existe a la fecha texto ordenado del nuevo contrato, sino un conjunto de normas que corrigen las anteriores.

Esquema regulatorio básico en el contrato original era un mecanismo ad hoc de costo de servicio, con revisión por cláusula gatillo ante evolución de un índice de costos (más o menos 7% del costo de la canasta, gatillaba una revisión no automática, sino negociada). Desde la renegociación el esquema combina un "Price Cap", modificado por quinquenio por comparación con la "Empresa Modelo", con traspaso automático de la variación de costos a través del ajuste anual por índice de precios. Se usará el promedio simple entre el Producer Price Index-Industrial Commodities y el Consumer Price Index-Water and Sewerage Maintenance (fuente: Bureau of Labor Statistics Data de Estados Unidos).

En el contrato original habían causales adicionales de variación de tarifas como "Hechos del Príncipe" (cambios impositivos, paridad cambiaria, etcétera) y, en una interpretación de la empresa, no compartida por el regulador, cambios en la demanda de agua per cápita (ingreso medio como variable regulatoria, artículo 47 Marco Regulatorio). Se mantuvieron después de la renegociación los "Hechos del Príncipe" (cambios impositivos, paridad cambiaria, etcétera) y se eliminó taxativamente el artículo 47, que había dado lugar en su momento a una discusión entre el regulador y el concesionario.

Las revisiones tarifarias ordinarias inicialmente implicaban la evaluación de la gestión en el quinquenio previo (sin procedimiento establecido) y proyección del período remanente de la concesión. Luego de la renegociación, se efectuará una valuación de la gestión en el quinquenio previo, con indicadores específicos (Exposición Financiera Neta Quinquenal EFNQ y Anualidad Equivalente AEQ). Se proyectará la "Empresa Modelo" para el resto de la concesión. Se definirán las metas de eficiencia (Factor X y "Empresa Modelo"). Se determinará costo de capital para el operador (ATD: Adecuada Tasa de Descuento), y se proyectará la Posición de Equilibrio a mantener (PE).

En el esquema regulatorio original se efectuaban revisiones tarifarias extraordinarias ocasionadas por variación de costos, cuando el gatillo llegaba a $\pm 7\%$. También para incorporar "Hechos del Príncipe". Ahora tendrán lugar revisiones de carácter anual, para ajuste de costos según índices de precios de Estados Unidos y se conservará el recurso extraordinaria para incorporar "Hechos del Príncipe" y explícitamente por caso fortuito o fuerza mayor: por hechos "relevantes" y "permanentes" que impidan continuar la prestación del servicio.

En el contrato original, las pérdidas absolutas de eficiencia no se incorporaban a precios. Actualmente se contempla que las ganancias de eficiencia deberían transferirse a los consumidores en cada revisión quinquenal (sin procedimiento especificado). Con los viejos criterios, las pérdidas relativas de eficiencia no se vuelcan a las tarifas y las absolutas sí. En tanto que con los nuevos, tanto las ganancias absolutas y relativas de eficiencia se transfieren a los usuarios. La nueva regulación también introdujo un factor X que da un piso anual de ganancia de eficiencia que se transmite a la tarifa.

El costo de capital del operador en la primera fase de regulación, fue el original de la oferta en la licitación, aceptándose incorporar las variaciones en el costo del capital prestado (Libor o Prime + 1,5%). No existía un mecanismo explícito para ajustar el costo del capital propio. Posterior a la

renegociación, se determina por quinquenios, de manera externa a la concesión, mediante métodos internacionalmente reconocidos (Promedio Ponderado del Costo del Capital WACC y Modelo de Valuación de Activos de Capital CAPM). Se incorporan allí el riesgo país y el propio de la actividad (Beta de la actividad respecto del portafolio de mercado).

En la regulación precedente, el riesgo empresario es un principio rector de la regulación. No quedaban cubiertos por la regulación los riesgos operativos y los de demanda agregada. Bajo el esquema más reciente, el riesgo empresario sigue siendo un principio rector de la regulación. El operador debe absorber los cambios relativos de costos (respecto al nivel índice de precios), fluctuaciones en la demanda, pérdidas de eficiencia relativa, variaciones en el costo del capital dentro del quinquenio.

Hasta la renegociación hubo divergencia de opinión sobre si la regulación es de medios, de metas o de ambas cosas. Ligado a lo anterior, existía un régimen de sanciones rígido, que no admitía aplicación del criterio del Regulador. Por ende, las multas no siempre guardaban relación con los incumplimientos, perdiendo en parte su papel de incentivos. La regulación precedente, no preveía compensación a usuarios individuales. Con las modificaciones, salvo que se lo establezca taxativamente, la concesión es por metas. Las sanciones son de monto máximo. Por quinquenio se establece una matriz de metas y los incumplimientos se castigan con montos proporcionales al valor de las metas por n veces la ATD (costo del capital). Se prevé ahora compensación a usuarios individuales.

La tarifa es un cuasi-impuesto inmobiliario, por superficie edificada. La micromedición es la excepción. Además en los usuarios micromedidos, el cargo fijo es el 50% de la tarifa por superficie. Las expansiones se financiaban hasta la renegociación con el Cargo de Infraestructura (CI). No ha variado el carácter catastral de la tarifa, pero se estableció un programa de trabajo concreto para que al comenzar el tercer quinquenio (1 de enero de 2004), el servicio se facture según el consumo de los usuarios. El cargo Servicio Universal (SU) a los usuarios existentes reemplazó al componente de red del CI. El Cargo de Integración al Servicio (CIS) a los usuarios nuevos incorporados, financiará la conexión. Y el cargo Medio Ambiental (MA) financia un conjunto de nuevas obras ambientales no previstas en el contrato original, que se incorporaron como un subproducto de la renegociación.

A continuación se presentan en las próximas ocho secciones, los instrumentos legales de la renegociación, por orden cronológico: Decreto 149/97, Decreto 1167/97, Decreto 1087/98, Resolución 1103/98 SRN y DS, Resolución 601/99 SRN y DS, Resolución 602/99 SRN y DS, Resolución 1111/99 SRN y DS y Decreto 1369/99.

II-Decreto 149/97, del 14/02/97, BO 20/02/97.

Dada la necesidad establecida por la SOP y T (Autoridad de Aplicación) de “adoptar medidas que constituyan una solución para la problemática surgida con relación a la ejecución del contrato”, la “significativa experiencia (acumulada) en relación a las diversas incidencias de ejecución, lo que torna conveniente la adopción de medidas correctoras”, que “surgieron nuevas exigencias motivadas por razones de interés público que han sido plasmadas a través de varias presentaciones de la Empresa”, que son cuestiones “con un alto grado de complejidad”, que “en este contexto resulta conveniente iniciar un proceso conjunto de renegociación de los contenidos que integran las contraprestaciones contractuales sin alterar la ecuación económico-financiera oportunamente convenida”, que distintos sectores “han manifestado la necesidad de encontrar soluciones a los diversos inconvenientes surgidos durante la ejecución del contrato”, que se “debe evaluar la incorporación de nuevas áreas al ámbito geográfico de la concesión”, que se había

creado en la SRN y DS la Subsecretaría de Política Hídrica y Ordenamiento Ambiental “con competencia en la elaboración de la política hídrica nacional”, que la complejidad de las materias reguladas hacen necesario establecer “un plazo razonable” para cumplir los cometidos y efectuar los estudios de consultorías necesarios, se dictó el Decreto.

Se estableció que el Contrato (aprobado por Decreto 787/93 y regido por la Ley 23696) “podrá modificarse con el objeto de satisfacer necesidades de interés público no previstas en el contrato originario y que hubieran surgido durante su ejecución” (artículo 1).

Serían sujetos de la Renegociación el Estado Nacional (a través de la SOP y T y la SRN y DS) y la Empresa Aguas Argentinas SA (artículo 2).

Comprendería aspectos enunciados a continuación, así como toda otra cuestión “que contribuya al mejor cumplimiento de los objetivos y principios del Marco Regulatorio aprobado por Decreto 999/92 y las necesidades de interés público”: a) Cargo de Infraestructura y b) Compatibilización del plan de gestión ambiental de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo y los planes directores de agua y cloacas (artículo 3).

“Con relación al objeto de la renegociación...” podrían contemplarse entre otras alternativas: a) Prórroga del plazo contractual, b) Diferimiento de inversiones, c) Reprogramación de obras, d) Determinación de nuevas inversiones, e) Planes directores cloacales y de agua potable, f) Parámetros económicos y financieros de la concesión, g) Incorporación de nuevas áreas a la concesión (artículo 4).

Se fijó un plazo de 180 días, prorrogable por igual lapso por resolución conjunta de las SOP y T y la SRN y DS (artículo 5). Estas elevarían al PEN la propuesta de modificación que resultare (artículo 6). Ambas Secretarías, mientras durase la Renegociación, y con la intervención de la Comisión Bicameral y la SIGEN a adoptar las medidas provisionales al Contrato, que se acordaran expresamente con la Concesionaria (artículo 7). Las Secretarías estarían facultadas a contratar los servicios de consultoría que fueren necesarios (artículo 8), y a realizar las interpretaciones y aclaraciones que demandara la aplicación del Decreto (artículo 9). La Comisión Bicameral sería puesta en conocimiento del Decreto (artículo 10).

III-Decreto 1167/97 del 07/11/97, BO 29/11/97

Entre los considerandos del Decreto 149/97, que convocó a renegociar el contrato, se refiere que la Reforma Constitucional de 1994 incorporó el principio del daño causado al medio ambiente y la prevalencia de los tratados internacionales ratificados por la Argentina sobre las leyes nacionales. Con posterioridad a la licitación se verificaron modificaciones legislativas que incidieron significativamente en los estándares ambientales a ser cumplidos por el concesionario para la ejecución del Plan Director Cloacal. Se mencionan la Ley de Residuos Peligrosos y su reglamentación, y el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques y sus modificaciones. A su vez, la política de racionalización del consumo de agua, la aprobación del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, las constataciones respecto a la calidad del efluente y los estudios del ETOSS en su conjunto, tornaron a juicio del Poder Ejecutivo, aconsejable la reformulación del Plan Director Cloacal de la Concesión. Por el Concedente, negociaron la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SRNyDS). Aún cuando la SOP es la Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión, la participación de la SRNyDS se dio “en razón de la significativa incidencia de las obras relacionadas a aspectos ambientales que serán cubiertas con los ingresos percibidos en razón de dicho concepto”. Para “resguardar las competencias territoriales que se desprenden del Contrato de Concesión”, se constituyó una

Comisión Asesora integrada por representantes de las tres jurisdicciones, coordinada por la SRNyDS, con específica referencia a las disposiciones resueltas en virtud de la renegociación para participar en la planificación y seguimiento de la ejecución de las obras alcanzadas por dicho concepto.

El ETOSS, dependiente de la SOP había manifestado su opinión favorable a la revisión de las estipulaciones contractuales relativas al Primer Plan Quinquenal de Mejoras y Expansión del Servicio, así como del concepto tarifario “Cargo de Infraestructura”.

La renegociación comprendió la revisión del Cargo de Infraestructura, la compatibilización del Plan de Gestión Ambiental para la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo y los planes directores de agua potable y desagües cloacales así como toda otra cuestión que contribuya al mejor cumplimiento de los objetivos y principios del Marco Regulatorio y de las necesidades de interés público.

En concordancia con las disposiciones del Decreto 149/97, las partes suscribieron el Acta Acuerdo del 30/04/97 con Dictamen favorable de la SIGEN y de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, homologada por la SOP y la SRNyDS. En el Acta Acuerdo, se convino que el concesionario debía presentar una propuesta integral de modificación del Contrato de Concesión, al efecto de su oportuno análisis por las Secretarías citadas, lo que fue satisfactoriamente concluido. Dicha propuesta tuvo en consideración que no se alterase el equilibrio económico-financiero del contrato en su conjunto. Como parte de la propuesta, la empresa concesionaria elaboró un Plan de Saneamiento Integral (PSI), que constituye el esquema medular de la modificación al Plan Director Cloacal de la Concesión. El PSI contempla el saneamiento integral de los cuerpos receptores en el ámbito de la concesión en base a objetivos de calidad que garanticen la sustentabilidad de sus usos y el tratamiento más eficaz de los efluentes generados en el ámbito de la concesión, así como el adelantamiento de las metas de cobertura del servicio cloacal.

El Acta Acuerdo del 30/10/97, adoptó un plexo normativo superador de las dificultades que dieran origen al proceso de revisión contractual. El concesionario, como consecuencia, debía presentar a consideración de la SRNyDS para su aprobación los proyectos correspondientes de obras y acciones. Corresponde atribuir a la SRNyDS, la expedición de permisos de vertido de efluentes líquidos que establezcan con certeza los parámetros a ser cumplidos. El adelantamiento de metas cloacales consistió en brindar cobertura cloacal adicional para aproximadamente 240.000 habitantes dentro de un plazo cuyo vencimiento no puede ser posterior al 31/12/2003.

El Cargo de Infraestructura, creado para financiar la expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales, originó fuertes resistencias de los beneficiarios *“basadas fundamentalmente en la inequidad de imponerles en forma exclusiva el financiamiento de tales obras”*. *“Se planteó así la necesidad de adoptar una política acorde con el beneficio que resulta para la sociedad en su conjunto, en razón de la extensión de la infraestructura del servicio”*.

Por lo anterior, se propugnó la eliminación del Cargo de Infraestructura y “en una dimensión económica limitada” a las unidades beneficiarias de los Planes de Mejoras y Expansión del Servicio, financiados y ejecutados por el Concesionario desde el inicio de su gestión.

Para implementar las expansiones contempladas en la concesión, así como los nuevos objetivos ambientales previstos, se argumenta en el Decreto, es menester generar el flujo de ingresos que los posibilite, estableciendo el concepto denominado SUMA, por el cual se cubriría el financiamiento del costo de la red domiciliaria y las nuevas conexiones, así como la diferencia de financiamiento de las inversiones que derivan del PSI en relación al PMES *“que se solventará en forma solidaria por todos los usuarios beneficiados, hasta alcanzar la plena cobertura prevista y los objetivos del PSI, sin alterar el equilibrio económico financiero del contrato, y conforme a un*

criterio de justicia distributiva, deducidos que han sido previamente, los montos correspondientes a obligaciones ya devengadas a cargo del concesionario". El concepto "encuentra su basamento en el principio de solidaridad...por cuanto la expansión beneficia esencialmente la comunidad toda y no sólo a quienes se incorporen a los servicios de agua y desagües cloacales".

Se dispuso la adecuación del Contrato de Concesión disponiendo la culminación de los planes quinquenales allí establecidos desde el primero al quinto respectivamente, en las fechas de 31/12 de 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018, quedando el sexto plan con fecha de vencimiento al 30/04/2023.

Se menciona que se habían evidenciado algunas dificultades en torno al régimen de regulación económica aplicada para la concesión, que no permitían la completa operatividad de un conjunto de principios rectores del Marco Regulatorio. Este aspecto se estudiaría por un equipo de trabajo especialmente conformado al efecto, integrado por representantes de la SOP y de la SRNyDS, con la participación del ETOSS (dependiente de la SOP) y del concesionario.

El sistema de revisión tarifaria por modificación de costos, en un esquema de estabilidad de precios, se consideró iba en detrimento de la ecuación económico-financiera del contrato celebrado debiendo ser complementado "incluyendo un mecanismo que permita revisiones periódicas...en concordancia con la necesidad de asegurar a la concesión un nivel de ingreso suficiente que permita afrontar las obligaciones asumidas hacia el futuro".

Al margen de los mecanismos previstos en el contrato en resguardo de eventuales cambios en la paridad cambiaria de la Ley de Convertibilidad, se consideró conveniente establecer "un traslado inmediato a precios y tarifas de la diferencia que se genere por variaciones que pudieren introducirse en dicho régimen legal".

Para abarcar otros requerimientos referidos a prestaciones conexas al objeto de la concesión, se adecuarían las normas estatutarias de la concesionaria de manera de ampliar su objeto social.

En relación a las penalidades notificadas al concesionario por incumplimiento de metas correspondientes al año 2 de la concesión, los considerandos del Decreto refieren que los "montos referidos han revertido al usuario a través de un procedimiento de deducción a éste, expresamente descripto en el marco del Acta-Acuerdo y con renuncia del concesionario a sus reclamos en curso. Para los incumplimientos del año 3, el ETOSS había cuantificado los mismos en el marco de la renegociación, acordándose la ejecución de las obras del Proyecto Puerto Madero, por un monto similar al de la estimación formulada, agotándose recíprocamente las instancias de reclamo pendientes.

El cumplimiento de las metas de los años 4 y 5 de la concesión correspondería verificarse de acuerdo al nuevo plan.

El Decreto 1167/97 aprobó el Acta-Acuerdo entre la SOP y la SRNyDS, por una parte, y Aguas Argentinas (Anexo I del Decreto). El Acta-Acuerdo, incorporó entre sus disposiciones en materia ambiental el ajuste de las metas quinquenales previstas en el PMES del Contrato de Concesión, en particular:

- 1) Dar servicio a la totalidad de la población del área concesionada, así como a las industrias con vertido admisible a la red concesionada.
- 2) Ejecutar las obras de intercepción, transporte, tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales e industriales admisibles a fin de asegurar la sustentabilidad de los usos de los cursos receptores en el área de la concesión.
- 3) Tratar y disponer los barros de acuerdo a las normas vigentes.

En torno a la cuestión tarifaria, se eliminó el Cargo de Infraestructura (Artículo 40 del Régimen Tarifario aprobado por el Decreto 787/93 y se estableció el concepto SUMA. Este tiene por objetivo conjunto:

- 1) Cubrir el financiamiento del costo de la red domiciliaria y el suministro de nuevas conexiones de agua y cloacas de las áreas de expansión de la concesión, que integran el PMES.
- 2) Cubrir la diferencia de financiamiento necesario para ejecutar las inversiones previstas en el quinquenio en el rubro “bienes de uso afectados al servicio del PMES que deriven del PSI, en función de una metodología comparativa entre este último y el originalmente contenido en el Contrato de Concesión”.

El SUMA regiría desde el 01/11/97, aplicándose con carácter uniforme por partida de unidad funcional (incluidos baldíos) y por servicios, y sus valores se expresarán en forma discriminada en la respectiva facturación. El valor se determinaría por quinquenio, y en ningún caso superaría los \$ 3. El concepto no estaría afectado por el porcentual de financiación del Ente Regulador.

El valor inicial del SUMA, obtenido por metodología en Anexo, sería de \$ 2,01 bimestrales por partida de unidad funcional (incluidos baldíos) y por servicio, vigente hasta la terminación del segundo quinquenio de la concesión.

Anualmente se efectuaría un control y ajuste por fórmula. El ETOSS verificaría dentro de los 60 días corridos de finalizado cada período anual, el cumplimiento de la expansión y ajustaría el valor.

La Autoridad de Aplicación dispondría las reglas y plazos relativos al régimen de acreditación y reintegros a los usuarios por la eliminación del Cargo de Infraestructura.

Se estableció un Cargo de Integración al Servicio que afectaría únicamente a las unidades funcionales que resulten o resultaron alcanzadas por los PMES ejecutados y financiados por el concesionario desde el inicio de la concesión. A partir del 01/11/97 se aplicaría como CIS un valor fijo y uniforme por unidad funcional alcanzada, incluidos baldíos. Se pagaría por cinco años y para usuarios aún no incorporados regiría a partir del período de facturación siguiente a aquél durante el cual se conecte el servicio a la unidad correspondiente. El CIS se discriminaría en la factura y no estaría afectado por el porcentaje de financiamiento del ETOSS. Se fijó el CIS en \$ 4 por bimestre y por servicio. SUMA y CIS estarían alcanzados por la variación porcentual que sufra el coeficiente K del Régimen Tarifario, a partir de la vigencia del Acta-Acuerdo. Además, se incorporaría sobre sus valores el IVA.

Cuadro 1: Cálculo del cargo SU						
Período	Y (\$) Valorización actualizada de los CI realizados y/o a realizar en el I Quinquenio por AA	W (\$) Valorización de los CI a realizar por AA en el período.	Z (\$) Recursos generados por el cargo CIS en el período	X (\$) Multas actualizadas del primer y segundo año de la concesión	F Sumatoria de unidades funcionales de agua y cloacas en el período	SU = (Y+W-X-Z)/F Luego del II Quinquenio, Y y X son cero, quedando (W-Z)/F
Apartado I Períodos modificados						
Primer Quinquenio Expandido, Segundo Quinquenio	133.523.400	269.781.800	57.493.274	3.194.104	185.407.661	\$ 1,8478/F
Tercer Quinquenio		248.958.700	54.015.817		172.397.052	\$ 1,13078/F
Cuarto Quinquenio		156.129.500	35.233.639		185.811.433	\$ 0,651/F
Quinto Quinquenio **		85.799.800	20.358.155		195.060.872	\$ 0,38/F
Sexto Quinquenio		79.009.900	14.215.435		202.798.372	\$ 0,3195/F

Apartado II Períodos sin modificar						
Segundo Quinquenio	133.523.400	222.234.400	49.354.186	3.194.104	164.320.002	\$ 1,845/F
Tercer Quinquenio		255.176.400	53.564.196		169.600.028	\$ 1,189/F
Cuarto Quinquenio		164.782.600	37.802.146		184.772.346	\$ 0,6872/F
Quinto Quinquenio		96.309.200	22.147.765		193.468.857	\$ 0,3833/F
Sexto Quinquenio		88.831.600	14.175.530		201.161.998	\$ 0,3711/F
Apartado III Períodos modificados y nuevas metas ambientales						
Primer Quinquenio Expandido, Segundo Quinquenio	142.034.900	299.755.400	64.552.274	3.194.104	186.477.278	\$ 2,0058/F

El ETOSS, al momento de la revisión ordinaria, aprobaría un nuevo plan de inversiones en materia de transporte y tratamiento cloacal, basado en el PSI. El ETOSS debería establecer un plan tal que comparado con el de la oferta mantuviera, como máximo, la TIR del accionista y las tarifas vigentes. Si el plan no cubriera la totalidad de los costos, deberían calcularse los ingresos imputables obtenidos de los nuevos cargos, manteniendo la TIR señalada. También se definirían en la oportunidad, los recursos emergentes y los recursos correspondientes a los nuevos cargos, para asegurar el financiamiento del Plan, a la TIR que se determinara para los siguientes quinquenios.

La revisión tarifaria extraordinaria, prevista en el Contrato de Concesión cada vez que los costos variaran más del 7% acumulado, tendría lugar en ese evento o por año calendario (incluido el presente al suscribirse el acta), lo que ocurriera antes. En caso de que lo relevante fuera el período, la variación se realizaría deduciendo el factor de equilibrio entre períodos existentes a ese momento.

En caso de modificación cambiaria, se trasladaría provisoriamente a precios y tarifas la variación legal de la paridad, a partir de la vigencia de la nueva legislación, salvo que en 15 días corridos la Autoridad de Aplicación adoptara fundadamente otra determinación, previa consulta con el concesionario. Se iniciaría automáticamente un revisión a los 90 días corridos de la variación.

La Autoridad de Aplicación, con la participación del ETOSS y la SRNyDS en los aspectos previstos en el Decreto 149/97 y sus normas complementarias conformarían un equipo de trabajo para reformular el régimen regulatorio de la concesión.

Las partes renunciaron en forma recíproca a cualquier reclamo vinculado con sus pretensiones pendientes, relativas a los planes de mejora y expansión, cargo de infraestructura y revisiones tarifarias.

Para fijar las reglas para acreditación y reintegro del CI, en armonía con la puesta en vigencia del SU y el CIS, se dictó la Resolución 137/97 SOP-MeyOySP. Para determinar los saldos objetos de reintegro, se estableció el devengamiento de un interés compensatorio a favor de los usuarios, desde la fecha de pago incurrida, hasta la efectiva devolución del crédito. A estos no se les facturarían los nuevos conceptos, hasta tanto no se hubieran puesto a su disposición los saldos acreedores respectivos. Se ofertaría el reintegro del saldo neto acreedor de cada usuario al contado, con la opción voluntaria en paralelo, de aplicar dicho crédito al pago de futuras facturaciones. Las deudas por servicios recibidos, que por haber estado vinculadas al ex CI

quedaron total o parcialmente impagas, podrían regularizarse en 180 días sin recargos e intereses. Al 30/06/98 debían estar completadas las devoluciones y/o puestas en marcha de las regularizaciones que se estipularon. En Anexo se presentaba el régimen para la devolución del ex CI.

Los pagos realizados, que se restituirían, devengarían una tasa de interés del 1% mensual desde el momento en que se hubieran realizado, hasta su total devolución. La concesionaria no facturaría los nuevos conceptos a los usuarios que antes hubieran sido facturados al CI, hasta no haber determinado y notificado el saldo de los usuarios con derecho al reintegro. Fuera del tratamiento de las deudas antes citadas, las restantes deudas que pudiera registrar el usuario recibirían el tratamiento previsto en la Resolución. Sobre los usuarios con saldo acreedor, los saldos a favor considerarían los intereses incrementales arriba nombrados, los importes devengados por los nuevos conceptos a partir del 01/11/97 y las deudas registradas.

Los usuarios podrían optar por percibir los saldos al contado, o aplicarlos a la cancelación de futura facturación general y ordinaria de la empresa, que notificaría el saldo respectivo y lo pondría a disposición de los primeros. Los agentes tendrían dentro de quince días de recibida la notificación, que ejercer la opción, caso contrario se presumía autorizada la acreditación del saldo, hasta su extinción, en las facturas regulares y ordinarias que la empresa emitiera a partir de ese momento. Tal opción podría ser revertida en cualquier momento mediante notificación del usuario. Del mismo modo, la empresa podría no aceptar o revertir en cualquier momento la aplicación de los saldos acreedores de los usuarios a facturación futura, pagando al contado. Si de los usuarios resultara calculada una deuda con Aguas Argentinas, la empresa aceptaría la cancelación de dicho saldo en cuotas bimestrales, libre de recargos e intereses si fuera en tres cuotas. Toda otra forma de cancelación, daría derecho a la aplicación de los recargos e intereses vigentes. El 30/06/98, se fijó como fecha límite para implementar los mecanismos de devolución y opción establecidos en la presente.

El Anexo III del Acta Acuerdo aprobada por Decreto 1167/97, incluyó las planillas de cómputos de justificación para determinar el concepto SU, que parcialmente se reproducen, debiendo complementarse con las respectivas descripciones analíticas, las cuales tuvieron el consenso de las partes signatarias. La SOP aprobó por la Resolución SOP 27/98 las reglas complementarias al Anexo III del Acta Acuerdo aprobado por Decreto 1167/97, que como Anexo I la integra. Ese Anexo consigna que el objetivo primario en la materia de la modificación establecida en el Decreto 1167/97, fue cambiar el CI por elementos compensatorios de tal acción. El Anexo III trata cuatro aspectos centrales:

- 1) Las bases metodológicas y cuantificaciones derivadas.
- 2) Breve evaluación de los resultados.
- 3) Modificaciones adicionales.
- 4) Mecanismos de regulación y control.

En torno al primer ítem, el cargo SU se aplicaría a todas las unidades de agua y cloaca (exceptuando unidades complementarias, esto es, cocheras y bauleras). A un inmueble con ambos servicios se les facturaría dos SU (uno por cada servicio). Se estimó un valor de diseño único para el período 01/11/97, y el final del primer quinquenio. Además, se estimó un valor de diseño para cada uno de los restantes quinquenios que podría ajustarse, de corresponder, por las normas de regulación y control que se explicitarán.

El cargo CIS se facturaría, por cada servicio, a todo inmueble que se incorporase a través de proyectos totalmente ejecutados y financiados por Aguas Argentinas. Su valor se fijó en \$ 4 por bimestre durante cinco años, a partir del momento en que el servicio se encuentre disponible o de la fecha de vigencia del Decreto 1167/97, la posterior.

La variación de las fechas de finalización de los Planes Quinquenales obligó a descomponer el análisis en dos escenarios distintos. El primero, introdujo los cambios sin variar el lapso original de los quinquenios. Si de comparar los resultados con CI a los de los cargos compensatorios resultara que no existen cambios relevantes y/o modificaciones que posibilitaran inferir un beneficio para la empresa, se concluiría que dichos cambios resultaron, por lo menos, neutrales con respecto a Aguas Argentinas. El segundo escenario, definió las cuantificaciones de los cargos compensatorios teniendo en cuenta la modificación temporal.

Como condiciones de base:

- 1) Se valorizaron los CI realizados por Aguas Argentinas durante los tres primeros años de la concesión.
- 2) Se valorizaron los CI realizados y/o a realizar por Aguas Argentinas durante el cuarto y el quinto de la concesión. Se verificó que los valores reconstituyeran los ingresos derivados por CI con base en la oferta del concesionario y la Resolución 81/94, durante todo el lapso de la concesión.
- 3) Se determinó el coeficiente Y: obtenidos los montos que el concesionario debió haber facturado por los CI, si el sistema hubiese funcionado eficazmente, se los actualizó hasta el mes de mayo de 1998 a una tasa del 1% mensual acumulativa (mitad del período entre el 01/11/97, inicio de la operatoria, y el 31/12/98, correspondiente a la Revisión Ordinaria, cierre del Primer Quinquenio y primera acción de control). La misma tasa de interés correspondería para la actualización de las multas y las devoluciones a los usuarios de los importes cobrados por CI. Tal tasa estaba fijada en el Contrato de Concesión para regular distintos aspectos de la relación Concedente/Ente con el Concesionario, siendo menor a la TIR de los accionistas.
- 4) Las metas aplicadas y/o a aplicar por los años segundo y tercero de la concesión, se actualizaron desde la fecha de las mismas hasta mayo de 1998 a la tasa señalada. Fue decisión del Concedente que revirtieran a los usuarios como una disminución del valor SU (componente X). Las multas para el tercer año se convertirían en una inversión adicional, sin efectos tarifarios, en Puerto Madero. Dicha obra en el corto plazo resultaría en un mayor nivel de endeudamiento, y en el largo plazo, en una leve disminución de la TIR del accionista.
- 5) La determinación del coeficiente W se correspondió con la totalidad del CI a facturar durante el segundo quinquenio. El método para calcular dichos valores fue análogo al usado en el factor Y: valorización, devengamiento año n, facturación 50% en el año (n+1) y 50% en el año (n+2). Para ambos escenarios definidos al inicio, el diferencial de metas de expansión para el fin del primer quinquenio se lo compensó en el segundo, estructurando para tal fin un programa progresivo de ajuste en las metas. Para el segundo escenario, a partir del sexto año de la Concesión, se aumentaron proporcionalmente las metas de cobertura en función del corrimiento de las fechas de cierre del quinquenio; lo mismo se aplicó a los restantes quinquenios.
- 6) La determinación del componente Z se correspondió con los recursos generados por el cargo CIS durante el lapso comprendido entre el 01/11/97 y el fin del segundo quinquenio. Resulta del valor predeterminado (\$ 4 por bimestre), por cinco años, multiplicado por el número de inmuebles afectados.
- 7) La determinación del componente F se corresponde con la totalidad de unidades funcionales de agua, por un lado, y de cloacas, por otro, estimadas para cada año.
- 8) La determinación del valor SU por el período comprendido entre el 01/11/97 y el fin del segundo quinquenio surge de:

$$1) \text{ Valor SU inicial} = (Y + W - X - Z)/F$$

Donde Y = valorización actualizada de los CI realizados y/o a realizar en el primer quinquenio por Aguas Argentinas,

W = valorización de los CI a realizar por Aguas Argentinas en el segundo quinquenio,

Z = recursos generados por el cargo CIS en el período,

X = multas actualizadas del primero y segundo año de la concesión,

F = sumatoria de unidades funcionales de agua y cloacas en el período.

9) La determinación del valor SU para los quinquenios restantes surge de la expresión:

$$2) \text{ Valor SU} = (W - Z)/F, \text{ dado que en adelante } Y = X = 0.$$

10) Los valores SU resultaron (Apartado I Acta Acuerdo):

SU inicial (*) = \$ 1,85 por bimestre, servicio y unidad funcional hasta 31/12/2003.

SU Tercer Quinquenio = \$ 1,13 por bimestre, servicio y unidad funcional hasta 31/12/2008.

SU Cuarto Quinquenio = \$ 0,65 por bimestre, servicio y unidad funcional hasta 31/12/2013.

SU Quinto Quinquenio = \$ 0,38 por bimestre, servicio y unidad funcional hasta 31/12/2018.

SU Sexto Quinquenio = \$ 0,32 por bimestre, servicio y unidad funcional hasta 30/04/2023.

(*) A modificar por adelantamiento de metas en virtud del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, Apartado III.

11) Se calcularon los valores SU correspondientes a quinquenio sin modificación de fecha de finalización (Apartado II, Acta Acuerdo).

No es posible inferir beneficio alguno para el Concesionario, en el modelo de regulación vigente, derivado de la eliminación del CI y su compensación por los cargos SU y CIS.

Respecto de la capacidad de pago de los usuarios situados en las áreas de expansión de la Concesión, “el principal problema que se generaba con el CI se vinculaba con la capacidad de ser solventado por los usuarios, dadas las actuales circunstancias socioeconómicas de las principales áreas de expansión”.

Se tomó como ingreso familiar mensual medio representativo de las áreas de expansión, el valor del Segundo Quintil de los Indicadores Demográficos de Ocupación e Ingreso (INDEC, abril 1996) de \$ 603 por mes, aproximadamente la mitad del valor promedio para la totalidad del Gran Buenos Aires. Los ingresos promedio del primer quintil para el período se calcularon en \$ 396 por mes¹.

¹ En términos mensuales, un nuevo usuario del servicio de agua en áreas de expansión pagaría, con la hipótesis del Apartado I o II:

1) Servicio \$ 2,50

2) SU-Agua \$ 0,93

3) CIS-Agua \$ 2,00

4) Financiamiento ETOSS \$ 0,07 (calculado sólo sobre 1)

5) IVA \$ 1,16

TOTAL \$ 6,66 (\$ 0,22 por día y por familia)

Lo anterior es el 1,1% de los ingresos familiares. Si se consideran los ingresos promedio del primer quintil, la cuenta de agua supondría 1,7% del ingreso familiar. La factura mensual de un nuevo usuario de cloacas incorporado en áreas de expansión quedaría en:

1) Servicio \$ 5,00

2) SU Agua y Cloacas \$ 1,85

3) CIS Cloaca \$ 2,00

4) Financiamiento ETOSS \$ 0,13 (calculado sólo sobre 1)

5) IVA \$ 1,89

Adicionalmente, se acordó con Aguas Argentinas el adelantamiento de metas ambientales conforme a lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental y del Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (cobertura cloacal adicional para 240.000 habitantes en seis años a partir de 1998 y hasta el final del Segundo Plan Quinquenal). Ello implicó el recálculo del cargo SU del Apartado III, Anexo III del Decreto 1167/97 para el período 01/11/97 y el 31/12/2003, resultando en \$ 2,01 por bimestre, por unidad funcional y por servicio.

IV-Decreto 1087/98, 14/09/98

Delegó en la SRN y DS la competencia para decidir sobre materias que en el Contrato habían sido reservadas al Concedente y no eran atinentes a la modificación y/o extinción del Contrato.

Dado que la SRN y DS se designó como autoridad de aplicación, que “resulta oportuno deslindar las competencias del Estado Nacional, en su carácter de concedente...” y las de la SRN y DS “en su carácter de Autoridad de Aplicación”, que “por razones de buen orden administrativo y especificidad técnica...” resultaba conveniente establecer que “todas aquellas acciones” que el Contrato colocaba a cargo del Concedente “que no importen modificar el Contrato” podrían ser objeto de resolución de la Autoridad de Aplicación, “mientras que aquellas que comporten modificaciones a dicho contrato o se refieran a su extinción o al rescate de la concesión, deberán instrumentarse a través de un decreto del PEN”, que “resulta conveniente autorizar a la Autoridad de Aplicación para aprobar la modificación de las normas concesionales ya previstas” en Decreto 1167/97, en función a las acciones previstas en el Acta Acuerdo del 30/10/97, previa intervención de la Comisión Bicameral y de la SIGEN, de esa forma “se aseguran los criterios de celeridad, economía, eficiencia y eficacia de la gestión administrativa” al tener la Autoridad de Aplicación “mejor aptitud técnica para la resolución de aspectos inherentes a la gestión usual del servicio”.

Se delegó en la SRN y DS “la competencia para decidir sobre materias que en el marco del Contrato de Concesión han sido reservadas al Concedente y que no sean atinentes a la modificación y/o extinción del Contrato” (artículo 1). La SRN y DS adecuaría las normas concesionales en los términos de la habilitación conferida por el punto 4.1 del Acta Acuerdo del 30/10/97, aprobada por Decreto 1167/97 (artículo 2).

V-Resolución 1103/98 SRN y DS, 28 de diciembre de 1998.

Dado que se había formalizado con la Concesionaria una nueva Acta Acuerdo del 21/11/98, con la intervención de la SIGEN y la Comisión Bicameral, que dicha acta respondió a la tarea realizada conjuntamente con la Concesionaria y en su elaboración se tomó en consideración los estudios realizados y las propuestas formuladas por el ETOSS, que tal Acta Acuerdo serviría de base para estructurar los demás temas pendientes incluidos en el punto 4.1 del Decreto 1167/97.

TOTAL \$ 10,87 (\$ 0,36 por día y por familia).

Representa el 1,8% de los ingresos familiares promedio del segundo quintil y 2,7% de los del primer quintil.

Si se superpusieran ambos CIS (de agua y cloacas), la situación financiera quedaría:

- 1) Servicio \$ 5,00
- 2) SU Agua y Cloacas \$ 1,13
- 3) CIS Agua y Cloacas \$ 4,00
- 4) Financiamiento ETOSS \$ 0,13 (Calculado sólo sobre 1)
- 5) IVA \$ 2,15

TOTAL 12,45 (\$ 0,41 por día y por familia).

Siendo 2,1% de los ingresos familiares del segundo quintil y 3,1% de los del primer quintil.

La SRN y DS aprobó el Acta Acuerdo del 21/11/98 anexada a la Resolución 1103 (artículo 1).

Acta Acuerdo 21/11/98

Entre la SRN y DS y Aguas Argentinas SA, teniendo en cuenta los Decretos 149/97, 1167/97, sus antecedentes, las negociaciones realizadas a la fecha, la opinión del ETOSS y lo establecido en el numeral 4.1 del Decreto 1167/97.

Se acordaron los ajustes a los compromisos contractuales, previstos en el Anexo I de la presente (comprendiendo parcialmente los numerales 4.1.1 y 4.1.5 del Acta Acuerdo aprobada por Decreto 1167/97 (artículo 1). La SRN y DS tendría a su cargo la determinación de la “Exposición Financiera Neta Quinquenal” para el primer quinquenio (numeral 4.1.2 del Anexo I) (artículo 2). Las partes acordaron precisar los alcances de los ajustes previstos a los compromisos contractuales vinculadas a los restantes aspectos del numeral 4.1, en particular, las cuestiones pendientes del numeral 4.1.8 (artículo 3). Los elementos anteriores (artículos 2 y 3) deberían producirse con una antelación mínima de 15 días a la finalización de la Primera Revisión Quinquenal (artículo 4). Resta la aprobación de la SIGEN y la intervención de la Comisión Bicameral (artículo 5). La SRN y DS redactaría las modificaciones de la normativa concesional para confeccionar el texto ordenado correspondiente.

Anexo I:

“La característica principal de la regulación económica que se desarrolla es la fijación quinquenal de ‘precios límite’ para los servicios prestados por el Concesionario mediante un sistema de comparación con un modelo de producción eficiente”. Tal precio límite se establecería por comparación de costos operativos e inversiones efectivamente incurridas por el Concesionario, con los que corresponderían a una empresa modelo, y determinando el “costo de capital” (ATD, con el que el Concesionario debe remunerar a sus acreedores y accionistas. La “empresa modelo” sería determinada en cada revisión quinquenal por el Concesionario y el ETOSS. El modelo establecería una comparación que permitiera establecer la eficiencia relativa a alcanzar por el Concesionario en el quinquenio siguiente. Para determinar los costos de dicha empresa modelo:

- 1) Se estudiarían coeficientes de rendimientos físicos correspondientes a empresas del país o del exterior, bajo condiciones homogéneas de comparación, con ello se estimarían los consumos físicos en que debería incurrir una empresa que presta el servicio con las condiciones de calidad exigidas al Concesionario.
- 2) Los consumos físicos estimados no serían máximos sino promedios (“Benchmarking de cantidades”).
- 3) Por estudios de mercado se determinarían los precios de los insumos que el Concesionario debería pagar (“Benchmarking de precios”).
- 4) Los consumos físicos de 1) y 2), valuados a los precios de 3), constituirán los costos de referencia de la empresa modelo para fijar los precios para el nuevo quinquenio.
- 5) Cuando el Concesionario y el ETOSS lo acuerden, se podrían utilizar indicadores de gastos para establecer los costos de la empresa modelo.

La “eficiencia de la empresa modelo” está representada por los costos operativos y de inversión determinados por los cinco acápites anteriores. La “eficiencia del concesionario”, en tanto, correspondería a los costos operativos y de inversión efectivamente incurridos en el año previo a la revisión quinquenal. El “Factor X”, de eficiencia global, representa la evolución futura esperada de la eficiencia global de la economía del país para el nuevo quinquenio.

Las “mejoras de eficiencia”, cambios para alcanzar la eficiencia comprometida al final del nuevo quinquenio, se compondría de mejoras necesarias para que al finalizar el quinquenio, el concesionario fuere tan eficiente como la empresa modelo en la revisión ordinaria previa, más las

mejoras de eficiencia derivadas de la evolución futura esperada de la eficiencia global de la economía (Factor X).

La eficiencia comprometida en la oferta se utilizaría como referencia para medir cumplimiento y para establecer objetivos futuros, mientras no se hubieran acordado los parámetros de la empresa modelo. Hasta tanto el Concesionario y el ETOSS no acordaran los parámetros de la empresa modelo, deberán establecer una metodología que permita determinar la eficiencia comprometida en la oferta.

El “Equilibrio Económico Financiero” si las tarifas permiten recuperar, en el plazo de la concesión, en condiciones de eficiencia, todos los costos asociados a la prestación (operativos, de inversión, impuestos y costo de capital medido por la ATD). La “Posición de Equilibrio” de la concesión es el valor presente de los flujos de fondos netos generados por la operación, descontados a la tasa de costo de capital (ATD). Sus proyecciones deberán contemplar criterios de referencia internacionalmente aceptados sobre la estructura financiera de la Concesión, mediante la proyección de los “Indicadores de Endeudamiento” (ID).

Las “Revisiones Anuales” ajustarán la economía de la concesión entre revisiones quinquenales. La revisión se efectuará de acuerdo con un índice estadístico de evolución de costos, exógeno al Concesionario. Aquél será tomado de entre los más representativos de la inflación de los Estados Unidos. Al respecto se estableció como índice representativo de la variación de los costos operativos de inversiones a aplicar, el Consumer Price Index-Water and Sewerage Maintenance (CPI-WSM del Bureau of Labor Statistics Data, Estados Unidos). Las revisiones previstas se efectuarán una vez al año, con vigencia a partir del 1 de febrero de 2000. Se tomarán variaciones anuales del índice.

Las “Revisiones Quinquenales” efectuarán el análisis del quinquenio pasado para determinar la Exposición Financiera Neta Quinquenal (EFNQ) al cierre del quinquenio. El análisis de la información presentada por el Concesionario y las proyecciones de los indicadores de calidad, eficiencia e inversiones establecidos en la Revisión Quinquenal previa, ajustados, serán la base sobre la cual se determinará la EFNQ. El proceso tendrá inicio seis meses antes que termine el quinquenio, y deberá permitir que desde el primer día del nuevo quinquenio se pueda dar operatividad a las decisiones y compromisos que la revisión implicase sobre tarifas, costos, eficiencia y PMES. El Concesionario elevará la información y dentro de los plazos previstos para la realización de revisiones, el ETOSS podrá efectuar las comprobaciones o estudios adicionales que estime necesarios.

Entre dos revisiones, el Concesionario y el ETOSS construirán la “empresa modelo”, cuyos niveles de eficiencia se utilizarán para determinar, por comparación, los costos de operación e inversiones necesarios para fijar los precios límites de los servicios provistos por el Concesionario, durante el siguiente quinquenio. Durante el segundo quinquenio ambas partes deberán acordar los parámetros necesarios para definir la empresa modelo así como los flujos y procedimientos de información requeridos. A partir de esos parámetros, se determinará un “Índice de Eficiencia Global” (IEG), que ponderará la actuación del concesionario respecto de la empresa modelo. Adicionalmente, deberán acordar el Factor X para el siguiente quinquenio. Durante el primer año del segundo plan quinquenal, deberán acordar el Factor X para ese quinquenio. Hasta tanto no se haya determinado un valor definitivo, se establecerá en el 0,5% anual el porcentaje de reducción de costos que correspondería alcanzar durante el segundo quinquenio por este concepto.

Las revisiones quinquenales, además, determinarán los compromisos del Concesionario sobre niveles de indicadores de eficiencia correspondientes en los siguientes quinquenios, considerando las metas y objetivos que se establezcan en la revisión de los PMES. El impacto sobre los costos

de compromisos de calidad y del programa de inversiones acordado, deberá establecerse, pudiendo dar lugar a un coeficiente anual de reducción/incremento de costos.

El Concesionario informará los niveles de eficiencia aplicable y el IEG acordado, y se efectuarán las proyecciones sobre la base de la “empresa modelo” acordada para el siguiente quinquenio según:

- Costos operativos,
- Costos de inversión,
- Amortización de los activos,
- Variaciones del activo y del pasivo circulante,
- Población servida,
- Otros indicadores.

Determinar los ingresos necesarios para que el concesionario pueda cumplir los compromisos establecidos, operando con eficiencia, en los cinco años sucesivos a la revisión, y proyectar los quinquenios remanentes hasta la finalización del contrato, en condiciones de equilibrio económico-financiero. La tarifa determinada deberá permitir recuperar, en el plazo de la concesión, y neto de eventuales subsidios de terceros, los costos operativos, de inversión e impuestos incurridos por el concesionario, en las condiciones de eficiencia comprometidas, permitiendo cubrir del costo del capital. Se calcularán los ingresos aplicando el tarifario a las proyecciones de población servida y de cobrabilidad, segmentada por nivel socioeconómico de clientes. Se podrán eventualmente incluir como parte de los ingresos requeridos componentes tarifarios de ingresos asignados (por ejemplo, cargo SUMA), para proporcionar a la concesión recursos para proyectos específicos predefinidos y planteados entre el ETOSS y el concesionario, o, en su caso, por la Autoridad de Aplicación.

Los gastos de operación para el resto de la concesión se calcularán sobre la base de proyecciones de demanda de servicio y tomando como base el promedio mensual de los gastos de operación en el año previo a la revisión. Esos gastos serán ajustados por metas de eficiencia comprometidas y no logradas, mejoras de eficiencia necesarias para llevar a la concesión a la empresa modelo de la revisión ordinaria previa, al finalizar el quinquenio, Factor X, mejoras de calidad que se decida incorporar para el quinquenio siguiente, y si el concesionario fuera tanto o más eficiente que la empresa modelo, en el quinquenio siguiente los costos se reducirán anualmente en el Factor X.

El cambio en los costos operativos acordado en la revisión quinquenal, deberá materializarse en un programa anual “prefijado” de variación tarifaria a desarrollarse en el período remanente de la concesión, compatible con su equilibrio económico financiero.

Las necesidades de inversión resultarán de la valorización de los objetivos de la concesión acordados entre el ETOSS y el concesionario. Este estimará el costo de implementar dicho programa y proporcionará la correspondiente certificación de los auditores de la concesión; aquél, podrá comprobar la eficiencia y razonabilidad de tales estimaciones con referencia a benchmarks nacionales e internacionales sobre el costo de proyectos de inversión semejantes. Se incluirán también inversiones para lograr metas de eficiencia comprometidas en la revisión quinquenal precedente y no alcanzadas y eventuales inversiones para recuperar atrasos en el cumplimiento de metas en quinquenios futuros.

Al igual que con los costos operativos, en la revisión ordinaria podrá establecerse un programa prefijado de variaciones tarifarias en función del perfil temporal del programa de inversiones.

En las revisiones extraordinarias, corresponderá determinar el impacto marginal sobre el equilibrio económico-financiero, generado por las causas motivantes de tal revisión. El ETOSS deberá requerir la autorización de la Autoridad de Aplicación, al efecto de habilitar el respectivo procedimiento (en 15 días corridos debe expedirse, o se supone aprobada). El ETOSS tiene 30

días hábiles para resolver la modificación, con una prórroga posible por circunstancias extraordinarias de otro tanto. Las actuaciones deberán ser remitidas a la Autoridad de Aplicación para su resolución.

Para una revisión extraordinaria, el ETOSS o el concesionario podrán proponer modificaciones tarifarias generales, modificaciones a metas en los PMES (como redefinición de áreas de expansión, elección de soluciones técnicas e institucionales alternativas para la expansión de los servicios, redistribución de las metas de expansión entre distintos partidos, redefinición de prioridades entre distintos servicios, reprogramación de la expansión del servicio en uno o más partidos). Todas las propuestas deberán preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión.

Una alteración cambiaria se trasladará a la tarifa. Los ingresos resultantes deberán al menos cubrir la diferencia prevista en el año siguiente entre los flujos del servicio de la deuda (denominados en pesos), originados por la variación de la paridad cambiaria, y el escenario que se hubiera producido sin variación de la paridad cambiaria.

Una revisión por caso fortuito o fuerza mayor, presentará las modalidades operativas propias de la revisión quinquenal, salvo el hecho de que no se examinará en esta circunstancia el cumplimiento de metas de eficiencia. Podrá ser pedida por el concesionario o por el ETOSS indistintamente, y estará habilitada cuando él o los hechos que la determinen sean permanentes y relevantes. Cuando se la denuncia dentro de los 15 días corridos del acaecimiento del hecho que la origina, se tomarán en cuenta las circunstancias producidas desde el momento de ocurrencia. En caso de invocación extemporánea, sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la denuncia. El ETOSS requerirá de la Autoridad de Aplicación autorización en los mismos términos que en el caso de revisión extraordinaria.

La relevancia estará dada, cuando la circunstancia haya generado o genere a corto plazo imposibilidad de alcanzar las metas comprometidas con el equilibrio económico-financiero comprometido y/o alteración sustancial de las condiciones de prestación del servicio y/o de los niveles de servicio y/o del estado de los activos. Será considerado relevante cualquier hecho que produzca un efecto equivalente a una variación en el spread entre el Par Bond 2023 y un T-Bond de similar vida promedio, mayor al $\pm 2\%$. Dicho margen podrá ser ampliado en las sucesivas revisiones ordinarias a medida que se vaya reduciendo la vida promedio de la concesión. Si los límites no fueran superados, los desvíos serán corregidos en oportunidad de la siguiente revisión extraordinaria o quinquenal lo que ocurriese primero. Se considerará permanente aquél evento que haya perdurado por más de un trimestre, o posea características tales que se pueda razonablemente argumentar que perdurará por más de un trimestre.

Las tarifas de los servicios prestados deberán establecerse a un nivel que permita recuperar, en el plazo de la concesión, los costos operativos, de inversión e impuestos incurridos y a incurrir por el concesionario en cada quinquenio, en condiciones de eficiencia, permitiendo además obtener una remuneración, medida por la ATD correspondiente también a cada quinquenio. Para ello se determinará una Posición de Equilibrio de la Concesión (PE), de acuerdo con el método estándar del descuento de los Flujos de Fondos Netos.

La SRNyDS aprobó el Acta Acuerdo del 21/11/98 anexada a la Resolución 1103. Se acordaron los ajustes a los compromisos contractuales. La SRN y DS tendría a su cargo la determinación de la “Exposición Financiera Neta Quinquenal” para el primer quinquenio. Las partes acordaron precisar los alcances de los ajustes previstos a los compromisos contractuales vinculadas a los restantes aspectos. La SRNyDS redactaría las modificaciones de la normativa concesional para confeccionar el texto ordenado correspondiente. El procedimiento establecido en esta Resolución

para determinar la Exposición Financiera Neta Quinquenal fue corregido por Resolución SRN y DS 602/99.

Quedaron como temas pendientes:

- 1) Rol de los auditores.
- 2) Régimen sancionatorio.
- 3) Adecuaciones al régimen tarifario vigente.
- 4) Procedimiento para valorización del inventario.
- 5) Régimen de arbitraje de la concesión.

VI-Resolución 601/99 SRN y DS, 8 de julio de 1999

Aprobó el Acta Acuerdo, que figura como Anexo. Se presentaron los principios, metodología y modelo económico financiero para la regulación económica de la concesión. Y se efectuó la determinación de la Exposición Financiera Neta Quinquenal correspondiente al Primer Quinquenio (EFNQ1). En Anexo II se ilustra la distribución de responsabilidades de las jurisdicciones y organismos vinculados al contrato de concesión. El Anexo III presenta los lineamientos y guías para la preparación y evaluación de las revisiones de los planes quinquenales. El Anexo IV lista los lineamientos y guías para la formulación de un nuevo régimen tarifario que oriente esencialmente al sistema de micromedición y el empleo de incentivos para el usuarios y el concesionario. El Anexo V se refiere a contabilidad regulatoria. En Anexo VI se presenta un relevamiento y análisis de la situación particular de los servicios sanitarios prestados por terceros en el área regulada de la concesión. El Anexo VII se refiere a la garantía de cumplimiento del Contrato de Concesión. El Anexo VIII, por último, dispone el rol de los auditores, y sobre la información que debe proveer el concesionario, el formato del Informe Anual y el formato del Informe de Niveles de Servicio.

VII-Resolución 602/99 SRN y DS, 8 de julio de 1999

Dado que correspondía determinar la EFNQ correspondiente al primer quinquenio, habiéndose solicitado informes al ETOSS, los Auditores de la concesión y al concesionario, que la Unidad Asesora de la Autoridad de Aplicación informa sobre la necesidad de aclarar algunos aspectos del Anexo I, Resolución SRN y DS 1103/98, que se considera conveniente propiciar la derogación del artículo 47 del Marco Regulatorio y aceptar la renuncia del concesionario a reclamar la aplicación de dicha norma en lo sucesivo, que se ha llegado a determinar la EFNQ, en orden a la compensación de inversiones no realizadas en el primer quinquenio, que la fijación del valor del EFNQ para el primer quinquenio permite concluir con cuestiones pendientes habidas entre las partes y restando únicamente la definición de algunos aspectos operativos a cargo del ETOSS o la SRN y DS.

Se aprueba la determinación de la EFNQ correspondiente al primer quinquenio, en el monto que surge de la aplicación de la metodología y a los cálculos que se agregan como Anexo I. También las aclaraciones al Anexo I de la Resolución SRN y DS 1103/98, que se agregan como ADDENDA A, y se acepta la renuncia del concesionario a reclamar la aplicación del artículo 47 del Marco Regulatorio y se propicia su derogación en ocasión de aprobar el texto ordenado de las normas concesionales.

El Anexo I es la determinación de la exposición financiera neta del primer quinquenio. El EFNQm trata de sintetizar en un solo valor monetario el desempeño efectivamente alcanzado por el concesionario en el cumplimiento de las metas del PMES del quinquenio. Se establece así si el desempeño efectivo se ajusta a lo proyectado y se utiliza para corregir en más o en menos las tarifas para el período remanente de la concesión, suponiendo que el resto de los parámetros de la concesión se mantienen según lo planeado y acordado oportunamente con el concesionario.

La EFNQm a valores regulados es la sumatoria de las diferencias anuales entre los ingresos recibidos (por tarifa general, precios o cargos) y los costos (operativos y de obra) e impuestos incurridos por el concesionario en el quinquenio m, actualizadas por la ATDm. Luego se determina la anualidad equivalente AEQm correspondiente también a ese quinquenio. La determinación de AEQm tiene por objeto devolverle (extraerle) en cuotas periódicas (anuales o no) que van hasta el final de la concesión, la contribución financiera neta (realizada con capital propio o de terceros) o el retiro neto de fondos realizados por el concesionario en ese quinquenio remunerado (devuelto) a la ATDm, lo que evita que cambios futuros en las ATD puedan significar beneficios (quebrantos) para el concesionario que nada tengan que ver con su eficiencia operativa y de inversión.

Para determinar la EFNQm hay dos elementos importantes: la ATDm y los FFNn ajustados. Para los quinquenios segundo a sexto, la ATD será la que se haya determinado para ese quinquenio en la revisión ordinaria anterior o la que surja de una revisión por caso de fuerza mayor. Para el primer quinquenio la ATD1 será aquella que aplicada al descuento de los flujos de fondos de la oferta permite que la suma de los valores allí descontados sea igual a cero:

$$\sum \text{FFNt} / (1 + \text{ATD1})^t = 0$$

Donde:

Σ va de $t = 1$ hasta 30.

La ATD1 implícita en la oferta es del 11,21%.

Los FFNn ajustados. En cada revisión ordinaria deben acordarse las metas del servicio para el quinquenio siguiente y para el período remanente de la concesión, y los costos (operativos, de obra y de capital) asociados a tales metas. Costos e ingresos necesarios se vuelcan en un flujo de fondos por el período remanente de la concesión, constituyendo los FFNn proyectados. En oportunidad de la siguiente revisión ordinaria, corresponde determinar cómo han sido afectados los flujos proyectados por decisiones del concesionario, del regulador o del concedente, y por causales que estando fuera de lo que deba ser considerado riesgo empresario, no han sido incorporadas por revisiones tarifarias de ninguna naturaleza. Habiéndose volcado los efectos aludidos para los años correspondientes al quinquenio previo, se obtienen los FFN1...5 ajustados, que actualizados a la ATDm permiten determinar la respectiva EFNQm. El EFNQ1 lo determinó la autoridad de aplicación, los siguientes lo hará el ETOSS.

Para el primer quinquenio, los valores proyectados se construyeron en base a las metas del PMES establecidos en la oferta original del concesionario, ajustadas por las modificaciones que a dichas metas introdujo la resolución ETOSS 81/94, y el punto 3.2 del Acta Acuerdo aprobada por Decreto 1167/97 (aprobación de inversiones realizadas hasta el cuarto año de la concesión, sin dejar sin efecto las multas por incumplimiento fijadas por el ETOSS hasta el tercer año, y establecimiento de un plan transitorio de inversiones hasta la aprobación del Plan de Saneamiento Integral (PSI) sustituto del Plan Director Cloacal de la Oferta. La sustitución de las metas de saneamiento junto con el cambio del CI para financiar expansiones, fueron los fundamentos básicos del Decreto 149/97 que habilitó el inicio de la renegociación).

Las menores obligaciones de inversiones no se tuvieron en cuenta en la determinación de la EFNQ1. Los cuatro primeros años no significaron alterar la ecuación económico-financiera del concesionario, para el resto del quinquenio el concesionario contaría con el SUMA y las circunstancias atenuantes del incumplimiento de metas son suficientemente tenidas en cuenta en el tratamiento asignado a los ingresos por la Autoridad de Aplicación.

Los valores regulados de costos operativos de inversión en cada año utilizaron los correspondientes a la oferta las actualizaciones introducidas por resoluciones del ETOSS corregidas. Las inversiones que el concesionario realizó, no incluidas en la oferta y las que estando incluidas fueron sustituidas por otras equivalentes, fueron consideradas a valores que comunicó el ETOSS. Este utilizó los precios corrientes, tal como están registrados en la contabilidad auditada del concesionario. Se reconoce que la inversión efectivamente incurrida no necesariamente coincide con su monto eficiente, pero por la inexistencia de valores regulados para tales erogaciones, se trata de adoptar valores verosímiles. De la certificación de auditores a los informes que el concesionario eleva al ETOSS, no se pudieron encontrar comentarios o juicios que revelaran que el concesionario esté utilizando medios inadecuados o cantidades excesivas de medios para alcanzar los objetivos comprometidos en el PMES. El “inventario valorizado” que anualmente el concesionario remite al ETOSS, describe los medios utilizados, que corresponden tanto a las inversiones reguladas (incluidas en la oferta y sus modificaciones) como aquellas no incluidas originalmente en la oferta. La eficiencia implícita en esta descripción de medios no fue motivo de inquietud del ETOSS. Sí lo fueron los precios que el concesionario pagó por sus contrataciones, en particular, por la ampliación de la planta de Bernal.

El fin del primer quinquenio se extendió por Decreto 1167/97 del 30 de abril de 1998, al 31 de diciembre de 1998. La EFNQ1 abarca por tanto desde el 1 de mayo de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1998.

La facturación quinquenal fue sustancialmente inferior a la prevista por la oferta. La baja cobrabilidad del CI, que a su vez afectaba la cobranza de del servicio mismo, en la medida que el servicio y el cargo se facturaban juntos, llevaron en primera instancia a solicitar que el concesionario se abstuviera de cobrarlo y luego a sustituirlo por el SU y el CIS (una cuarta parte del costo de la expansión, pero financiada en treinta cuotas bimestrales). Este último concepto tampoco pudo aplicarse por disposición judicial hasta fines de 1998. Otros ingresos no evolucionaron en la forma prevista en la oferta. Los menores ingresos fueron planteados por el concesionario al ETOSS en las dos revisiones extraordinarias realizadas desde el inicio de la concesión, “invocando una supuesta garantía de ingresos que brindaría el artículo 47 del Marco Regulatorio” (Artículo 47: “REGULACION. El Ente Regulador ejercerá la regulación tarifaria en base al análisis que él mismo realice de los planes de mejoras y expansión que el concesionario presente periódicamente. La variable de regulación tarifaria será el monto de ingresos que el Concesionario reciba por los servicios que preste en función del número de Usuarios servidos en cada año, y las condiciones de eficiencia que se propongan en cada plan”). El reclamo había sido rechazado por el ETOSS bajo la interpretación que “de ningún modo el concesionamiento había sido llevado a cabo previendo neutralizar el riesgo empresario derivado de ingresos reales divergentes a los previstos en la oferta”, que hubieran llevado a aumentos del K en la primera revisión extraordinaria de entre el 30 y el 41%, según se considerasen sólo la facturación de los usuarios residenciales o el total de facturación. La argumentación del ETOSS se centró en el efecto a corto plazo sobre los usuarios, aunque estaba la duda de haberse violentado un principio legal. Para el concesionario, en recurso de alzada, existía una garantía de ingresos, y se le debían compensar los desvíos producidos entre la proyección de facturación de la oferta y la efectiva, para cada uno de los conceptos de ingresos. Tal pretensión se fundó en el argumento de que en

virtud de los desvíos producidos en la facturación proyectada, el concesionario debió realizar gastos e inversiones que fueron más allá de los originalmente proyectados, que impidieron que tales desvíos no fueran más amplios aún y así cumplir con el contrato. El ETOSS argumentó que la última comparación no puede llevarse a cabo en algunos casos, por carecer la oferta del detalle que permita realizar la tarea, y en otros casos por la necesidad de incluir supuestos subjetivos que eventualmente la invalidarían.

De la discusión de las posiciones del ETOSS y del concesionario, se entiende que “si bien no existe en la regulación vigente una garantía explícita de ingresos reales, hay elementos suficientes para considerar que los participantes en el proceso licitatorio para la adjudicación de la concesión, pudieran razonablemente considerar que tal garantía existía”. Para la determinación del EFNQ1 se aplicará el criterio de lo “efectivamente facturado”. Para el futuro, la regulación puesta en vigencia por la Resolución 1103/98 de la SRN y DS, eliminó cualquier posibilidad de reclamo al establecer una regulación por “precios límites”. “Dadas las ambigüedades de la normativa vigente sobre el particular, y los conflictos que han provocado entre el Concesionario y el Ente Regulador, el criterio de aceptar hacia atrás una regulación por ingresos medios y hacia delante por una de precio tope...se funda en la convicción de que esta es la solución de costo mínimo para los usuarios en el largo plazo”.

La incobrabilidad real estuvo bastante por debajo de la proyectada en la oferta, pudiendo deberse a acciones u omisiones del concesionario (proyecciones optimistas y falta de un esfuerzo en la cobranza acorde con los antecedentes de morosidad de la clientela de OSN), deficiencias en el padrón de cuentas (argumentada en las dos revisiones extraordinarias por el concesionario, pero parcialmente desestimada, ya que la desactualización del padrón de clientes también significó que se les estuvo facturando a clientes inexistentes y generando por ello una “mora ficticia”), hechos vinculados con la órbita de decisión del concedente y/o del Ente Regulador que incrementaron la morosidad (como el rechazo de los usuarios al pago del CI y su impacto directo sobre la cobranza de los servicios y la demora del concedente en arbitrar una solución, falta de definición en cuanto a quién debía hacerse cargo de las exenciones otorgadas por el régimen tarifario a mutuales, la no compensación por el descuento a jubilados, la falta de pago por agua en bloque a Florencio Varela y Berazategui, y de agua y cloaca en bloque a Quilmes).

En porcentajes, la incobrabilidad regulada o proyectada en la oferta, resultó bastante similar a la real en los cuatro primeros años de la concesión, creciendo en el quinto año por previsionamiento de los CI que habiendo sido facturados en años previos fueron dados de baja por el Decreto 1167/97 y en mayor medida por “ajustes de facturación” de años anteriores a clientes inexistentes. Cuando se trató el capital de trabajo, la parte de morosidad real de corto plazo no adjudicable al concesionario no se tendría en cuenta.

El valor total regulado de los costos operativos es el que surge de la oferta, de los ajustes aplicados por las distintas resoluciones del ETOSS a la oferta y su posterior modificación. Tal valor regulado debió a su vez ser ajustado por la ocurrencia de los siguientes hechos: algunos de los objetivos del PMES no fueron alcanzados y ello significó que el concesionario tuvo un ahorro de costos que se restó a los costos regulados, el concesionario debió tomar a su cargo la distribución domiciliaria de agua potable y la recolección de los líquidos cloacales de Quilmes, desde el 16/02/96, cuando originalmente estaba previsto en el contrato provisión en bloque, y porque la aceptación del criterio de considerar la “facturación real” para la determinación de EFNQ1 significó que todos los costos operativos regulados directamente relacionados a la facturación debieron ser menores.

Para la valuación del capital de trabajo, las cuentas a cobrar se consideraron a valores regulados, ajustados a facturación real. Los inventarios se tomaron a valores regulados. Para las cuentas a

pagar se aplicaron los respectivos coeficientes de la oferta a los valores de costos operativos ajustados y a los de inversiones ajustadas. El valor de caja mínima se determinó aplicando los supuestos respectivos de la oferta a los valores de costos operativos ajustados.

Respecto de las inversiones, la oferta preveía un volumen para alcanzar los objetivos del PMES. Hubo ajustes por Resoluciones del ETOSS a los valores de oferta, para llegar a los valores regulados. Sobre estos hubo que efectuar ajustes: hubo objetivos no alcanzados, que el Decreto 1167/97 convalidó modificando el PMES. Esa convalidación no debía resultar en beneficio económico-financiero para el concesionario. El ahorro obtenido por las inversiones no realizadas se restó del valor regulado de las inversiones. Otras inversiones fueron modificadas, y registradas como “inversiones realizadas y no previstas” (por ejemplo, expansión de las redes domiciliarias de agua potable y desagües cloacales realizadas en Quilmes. Estas se sumaron al valor total regulado de las inversiones. En el rubro “Bienes de Uso” figuran inversiones no incluidas explícitamente en la oferta. El ETOSS sugirió aceptarlas por su “valor eficiente”, sugiriendo la participación de los auditores de la concesión en la materia. Se aceptó el respectivo valor contable auditado de las mismas, sumándose al valor regulado de inversiones. El rubro “Relevamiento Catastral y Padrón de Clientes” tuvo un tratamiento particular. Para el concesionario, eran gastos e inversiones que debió realizar en exceso de las originalmente proyectadas, para limitar el desvío entre la facturación proyectada y la real. El ETOSS recomendó determinar la conveniencia de su inclusión sujeto a que se estableciera que el valor presente de los beneficios obtenidos fuera mayor al de los costos incurridos. El EFNQ1 de no incluir tales erogaciones fue \$ 103,116 millones mayor que de incluirlos. Entre los “Activos Intangibles” figuran inversiones no incluidas en la oferta. El “Plan de Retiro Voluntario” excedió el monto previsto de \$ 37 millones. Se aceptó el exceso para determinar la EFNQ1 por representar una inversión en mejora de eficiencia que habría de revertir a los usuarios bajo la forma de una reducción de tarifas para el segundo quinquenio. El ETOSS recomendó como criterio para determinar la “conveniencia” de estas inversiones su inevitabilidad, siendo el valor sugerido el contable. Bajo ese criterio se activó el costo por hacerse cargo de la concesión de Quilmes (“Canon Quilmes”), instrumentada por Decreto 152/96. Allí debieron hacerse gastos de organización para financiar un plan de retiro voluntario para el personal de la Dirección General de Servicios Sanitarios de Quilmes.

El valor de la EFNQ1 obtenida según el procedimiento descripto fue de -\$ 823,345 millones.

La Addenda A establece las aclaraciones al Anexo I de la Resolución SRN y DS 1103/98. “La característica principal de la regulación económica que se desarrolla es la fijación quinquenal de ‘precios límites’... mediante un sistema de comparación con un modelo de producción eficiente”. El precio límite se establecerá por comparación de los costos operativos y de inversión efectivamente incurridos con los que corresponderían a una empresa modelo, conjuntamente con la determinación del “costo de capital” (ATD) con que el concesionario debe remunerar a sus acreedores y accionistas.

En cada revisión quinquenal se determinará la empresa modelo cuyos costos se utilizarán como referencia en dicha revisión. El objetivo del modelo es establecer un patrón de comparación que permita establecer la eficiencia relativa a alcanzar por el concesionario en el quinquenio siguiente.

Para determinar los costos se la empresa modelo, se estudiarán los coeficientes físicos correspondientes a empresas del país o del exterior, bajo condiciones homogéneas de comparación, estimándose los consumos físicos en que debería incurrir una empresa que presta el servicio en condiciones de calidad análogas a las exigidas al concesionario; se establecerán valores promedio para la estimación de consumos físicos detectados en empresas del país o del

exterior estudiadas (benchmarking de cantidades); se estudiarán los mercados de insumos a fin de determinar los precios que el concesionario debería pagar (benchmarking de precios); se determinarán los costos de la empresa modelo como referencia para fijar los precios límites para el nuevo quinquenio con la información anterior; si no fuera posible o no fuera necesario determinar consumos físicos de los insumos y sus precios de mercado, se podrán utilizar indicadores de gastos para establecer los costos de la empresa modelo.

La “eficiencia de la empresa modelo” es la representada por los costos operativos y de inversión determinados de acuerdo a lo anterior. Por “eficiencia del concesionario” se entiende la representada por los costos operativos y de inversión que efectivamente esté incurriendo el concesionario en el año previo al que se está desarrollando la revisión quinquenal. El “Factor de eficiencia global X” es la evolución futura (crecimiento o decrecimiento) esperada de la eficiencia global de la economía del país para el nuevo quinquenio. Para medir los cambios de eficiencia que el concesionario debería realizar para alcanzar la eficiencia comprometida, se definen las “Mejoras de eficiencia”. Estas tienen dos componentes: las necesarias para que al finalizar el quinquenio el concesionario como mínimo sea tan eficiente como la empresa modelo determinada en la revisión quinquenal previa. Con independencia de los costos operativos y de inversión efectivos, las tarifas considerarán los de la empresa modelo; el otro componente será el factor X, que se aplicará a los costos operativos y de inversión de la empresa modelo. Se entiende por “eficiencia comprometida” a los compromisos de eficiencia que el concesionario asume en cada revisión quinquenal para los futuros quinquenios.

La concesión estará en “equilibrio económico-financiero” si las tarifas permiten recuperar en el plazo de la concesión y en las condiciones de eficiencia comprometida, todos los costos asociados a la prestación, incluyendo los costos operativos, de inversión e impositivos, así como una remuneración determinada por el costo de capital (ATD). El “equilibrio económico-financiero” estará medido por la “Posición de Equilibrio de la Concesión” (PE), entendida como el valor presente de los flujos de fondos netos generados por la operación del servicio descontados a la ATD. Las proyecciones de tales flujos, teniendo en cuenta los compromisos de eficiencia, calidad e inversiones, deberán contemplar criterios de referencia internacionalmente aceptados sobre la estructura financiera de la concesión, mediante la proyección de los “indicadores de endeudamiento” (ID) definidos en la Addenda A.

Se estableció un nuevo esquema de revisiones tarifarias, reemplazando tanto al previsto en el Contrato de Concesión, como las modificaciones introducidas al mismo por el Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1167/97.

La revisión anual se efectuará de acuerdo con un índice que tome en cuenta la evolución de los costos sujetos a las condiciones de mercado y sobre los cuales el concesionario no puede influir. Se usará el promedio simple entre el Producer Price Index-Industrial Commodities y el Consumer Price Index-Water and Sewerage Maintenance (fuente: Bureau of Labor Statistics Data de Estados Unidos). Se harán una vez al año, con vigencia al 1 de febrero de cada año. Un mes antes el concesionario presentará al ETOSS, al efecto de su aprobación, la propuesta de actualización de sus tarifas, junto con la información de respaldo del índice que justifica su determinación, tomándose siempre variaciones anuales. En el año de la revisión quinquenal y para evitar la eventual aplicación de dos ajustes en las tarifas separados por un escaso período de tiempo, los costos de operación se ajustarán por la variación ocurrida en el índice entre el mes previo a la última revisión anual efectuada, y el mes más cercano al momento de cierre de la revisión quinquenal. Si el período resultante fuese menor que un año, el período no incluido se incorporará en la próxima revisión anual. La primera revisión anual correspondiente al año 1999,

operará el 01/02/00, computándose al efecto la variación del índice entre el 01/01/99 y el 31/12/99.

Las revisiones quinquenales efectuarán el análisis del quinquenio pasado para determinar la EFNQ, al cierre del quinquenio. Se analizarán la información del Concesionario (Informes Especiales, Anuales y/o Periódicos, Balances y Estado de Resultados y el Informe Quinquenal entre otros), y las proyecciones de los indicadores de calidad, eficiencia e inversiones establecidos en la Revisión Quinquenal previa, ajustados por modificaciones introducidas por Revisiones Anuales, Extraordinarias, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor a lo largo del quinquenio. Tal información será la base para determinar la EFNQ. La revisión se iniciará 6 meses antes de fin de quinquenio, y los resultados (tarifas, costos, eficiencia y PMES), deben ser operativos desde el primer día del nuevo quinquenio. Antes de la finalización de cada quinquenio, el concesionario presentará al ETOSS un Informe de Situación del Plan Quinquenal en curso y una proyección del plan de negocios para el nuevo quinquenio y para el plazo remanente de la concesión. Allí se resumirá el estado de las metas comprometidas antes de la finalización del período quinquenal y las proyecciones para los meses restantes. Se presentará la información requerida sobre los costos operativos y de inversión, certificadas por auditores, pudiendo el ETOSS efectuar las comprobaciones o estudios adicionales que estime necesarios, recabando del concesionario la información que considere conveniente.

Luego del análisis de la información del quinquenio pasado, se determinarán las características de la empresa modelo y la eficiencia esperada de la economía global del país. Para la Primera Revisión Quinquenal, no se contará con la empresa modelo, aplicándose el siguiente criterio por única vez: la base de proyección de costos para el resto del período de concesión serán los costos auditados de 1998; estos se afectarán desde el inicio de cada uno de los años del segundo quinquenio por un coeficiente de reducción del 0,5%, representativo del factor de eficiencia global X; desde el año 7 de la concesión, y hasta tanto el concesionario no hubiere efectuado la presentación comprometida para la determinación de la empresa modelo, se establecerá un porcentaje de reducción adicional de costos del 0,3% anual.

Antes del 1 de enero de 2001, el concesionario diseñará la empresa modelo y la elevará al Ente Regulador junto con la determinación de un Índice de Eficiencia Global (IEG), que ponderará la actuación del concesionario respecto de la empresa modelo. El ETOSS tendrá 12 meses para la discusión y aprobación de la empresa modelo. Si no hay acuerdo, deberá elevarse la cuestión a la Autoridad de Aplicación que en 6 meses realizará un proceso de mediación e intentará el acuerdo. Si no se llegara así a un acuerdo, la controversia se someterá a arbitraje que deberá concluir antes de la finalización del segundo quinquenio. Acordada la empresa modelo, las diferencias de eficiencia entre ésta y la de referencia, conllevarán el recálculo de los FFN correspondientes desde el inicio del segundo quinquenio y en ocasión de la segunda revisión quinquenal. Dichas diferencias serán compensadas en la determinación de la EFNQ del segundo quinquenio.

Posteriormente, se determinarán los compromisos de eficiencia para los siguientes quinquenios, considerando las metas y objetivos que se establezcan en los PMES, el impacto sobre los costos del concesionario de los compromisos de calidad y del programa de inversiones acordados para el siguiente quinquenio, que podrá dar lugar a un coeficiente anual de reducción o de incremento de costos. El concesionario informará los niveles de eficiencia alcanzados mediante los indicadores de eficiencia aplicables al quinquenio y eventualmente el IEG que se hubiese acordado, y se plasmarán las proyecciones, sobre la base de la empresa modelo acordada para el siguiente quinquenio según costos operativos, costos de inversión, amortización de los activos, variaciones del activo y del pasivo circulante, población servida y otros indicadores. Las proyecciones para el

resto de la concesión se calcularán a partir de las proyecciones de demanda de servicios y tomando como base el promedio mensual de los gastos de operación de la concesión en el año que precede al de la revisión. Tales gastos se ajustarán en la revisión quinquenal, por sobrecostos derivados de metas de eficiencia comprometidas y no logradas por circunstancias que estén a cargo del concesionario; incorporar las mejoras de eficiencia necesarias para que al finalizar el quinquenio, el concesionario como mínimo sea tan eficiente como la empresa modelo determinada en oportunidad de la revisión quinquenal previa; el factor X (mejoras de eficiencia derivadas de la evolución futura esperada de la economía) y el efecto de las mejoras de calidad de servicio que eventualmente se acuerden para el quinquenio siguiente.

Si el concesionario hubiera cumplido sus compromisos de eficiencia y fuera tanto o más eficiente que la empresa modelo establecida para la respectiva revisión quinquenal, el concesionario pasará a ser la empresa de referencia y, por lo tanto, en el quinquenio siguiente los costos se reducirán anualmente sólo para incorporar la eficiencia global esperada de la economía (factor X). En lo que respecta a necesidades de inversión, el concesionario estimará el costo de implementar dicho programa de inversiones y proporcionará la correspondiente certificación de los auditores de la concesión. El ETOSS podrá comprobar la eficiencia y la razonabilidad de estas estimaciones con referencia a benchmarks nacionales e internacionales sobre el costo de proyectos de inversión semejantes. Serán incluidas también las inversiones necesarias para lograr metas de eficiencia comprometidas en la revisión quinquenal precedente y no alcanzadas, las inversiones necesarias para recuperar atrasos en el cumplimiento de metas en quinquenios futuros. Podrá establecerse un programa prefijado de variaciones tarifarias en función del perfil temporal del programa de inversiones. A partir del análisis realizado, se definirán los compromisos de eficiencia para los servicios prestados por el concesionario para el nuevo quinquenio.

A continuación, se determinarán los ingresos necesarios para que el concesionario pueda cumplir los compromisos establecidos, operando con eficiencia, en los cinco años siguientes y proyectar la concesión remanente en condiciones de equilibrio económico-financiero.

La tarifa permitirá recuperar en el plazo de la concesión, y neto de eventuales subsidios de terceros los costos de operación, inversión e impositivos incurridos por el concesionario, así como una remuneración determinada por el costo de capital (ATD). Los ingresos obtenibles se calcularán aplicando el régimen tarifario contractual a las proyecciones de población servida y de cobrabilidad, segmentada por nivel socioeconómico de clientes. Se podrán eventualmente incluir como parte de los ingresos requeridos, componentes tarifarios de Ingresos Asignados, para proporcionar a la concesión los recursos destinados a inversiones asignadas, o sea, proyectos específicos predefinidos y planteados entre el ETOSS y el concesionario o, por la Autoridad de Aplicación.

La proyección de los costos acordada en la revisión quinquenal deberá materializarse en un programa de variación tarifaria a desarrollarse en el período remanente de la concesión, compatible con su equilibrio económico-financiero.

En las revisiones extraordinarias, la meta será determinar el impacto marginal sobre la PE de la concesión, generado por las causas previstas en el Contrato de Concesión, a excepción del impuesto a las ganancias. También se modifica el procedimiento referido a modificación de la paridad cambiaria establecida en la Ley de Convertibilidad. En la revisión se determinarán las medidas para corregir el efecto marginal, reconstituyendo las condiciones de equilibrio definidas en la última revisión quinquenal.

Requerida la revisión por el concesionario al ETOSS, éste en 15 días corridos deberá requerir la autorización de la Autoridad de Aplicación para habilitar el procedimiento. Esta deberá expedirse en 15 días corridos. Habilitado, el ETOSS contará con 30 días hábiles, prorrogables en caso

extraordinario, para resolver la modificación tarifaria general o modificación a las metas comprometidas en los PMES (como redefinición de las áreas de expansión, la elección de soluciones técnicas e institucionales alternativas para la expansión de los servicios, la redistribución de las metas de expansión entre distintos partidos, la redefinición de prioridades entre distintos servicios o la reprogramación de la expansión del servicio en uno o más partidos). Las propuestas que se aprueben preservarán la PE.

En caso de alteración de la paridad cambiaria, se la trasladará a la tarifa. Los ingresos resultantes deberán, por lo menos, cubrir la diferencia entre los flujos del servicio de la deuda (denominados en pesos) originados por la variación de la paridad cambiaria y el escenario que se hubiera producido sin variación de la paridad cambiaria, para el período correspondiente a los 12 meses inmediatos anteriores.

En el caso de revisiones por caso fortuito o fuerza mayor, el objetivo consiste en lograr el normal desarrollo del contrato de concesión en esos casos. Seguirá las modalidades operativas propias de la revisión quinquenal, pero no incluirá el cumplimiento de metas de eficiencia, podrá ser solicitada por el concesionario o el ETOSS y estará habilitada cuando el o los hechos que la determinen sean permanentes y relevantes. La relevancia estará dada por la imposibilidad de alcanzar las metas comprometidas en las condiciones de equilibrio económico-financiero comprometidas, o bien, alteración sustancial de las condiciones de prestación del servicio y/o de los niveles de servicio y/o del estado de los activos.

Será considerada “relevante” un cambio en la situación económico-financiera, motivada en cualquier hecho que produzca en la PE un efecto equivalente a una variación en el spread entre el bono argentino utilizado como referencia para obtener la TSR y un Bono del Tesoro de los Estados Unidos de similar vida promedio mayor al $\pm 3\%$. Dicho margen podrá ser ampliado en las sucesivas revisiones ordinarias, a medida que se vaya reduciendo la vida promedio de la concesión. Caso de no superar los límites, los desvíos serán corregidos en oportunidad de la próxima revisión (extraordinaria o quinquenal, la primera en ocurrir). Se considerará “permanente” la circunstancia que perdure por más de un trimestre, o bien, posea características tales que se pueda proyectar razonable y fundadamente que perdurará por más de un trimestre.

Las consecuencias a tener en cuenta serán las producidas desde el momento de ocurrencia del hecho que la habilita, si ha sido solicitada dentro de los 15 días del acaecimiento de la circunstancia habilitante. En caso de invocación extemporánea, deberá igualmente habilitarse la revisión, de resultar procedente, pero con efectos a partir de la fecha de la denuncia. Sea el concesionario o el ETOSS quien solicita la revisión, rige la necesidad de la autorización de la Autoridad de Aplicación del mismo modo y con los mismos plazos que en el caso de las revisiones extraordinarias.

En cada revisión quinquenal se establecerán las tarifas que permitan recuperar los costos operativos, de inversión e impositivos incurridos por el concesionario, así como una remuneración determinada por el costo del capital (ATD).

Cuadro 2: determinación de la PE.

$$1) \text{FFNn} = \text{INn} - \text{COOn} - \text{IMPn} - \Delta \text{Sn} - \Delta \text{CACn} + \Delta \text{CAPn} - \Delta \text{CaMinn} - \text{In} - \Sigma \text{AEQ}$$

Donde: INn (ingresos netos del año n) = Facturación bruta n – Incobrable n

COOn = Costos operativos del año n

ΔSn = Variación de stocks del año n

ΔCACn = Variación de cuentas a cobrar del año n

ΔCAPn = Variación de cuentas a pagar del año n

ΔCaMinn = Variación de caja equivalente a 15 días de costos operativos

IMPn (Impuesto a las Ganancias del año n) = $\text{Tn} (\text{INn} - \text{COOn} - \text{AMn})$

Tn = Tasa de impuesto sobre los beneficios del año n

Amn = Amortizaciones en el Estado de Resultados del año n

$\Sigma AEQ = \Sigma AEQ_i$, para i desde 1 hasta δ . Con $\delta = m - 1$ para el cálculo de la EFNQm (si m es mayor a 1), $\delta = m$ para el cálculo de la Pem y m representa el número de quinquenios transcurridos.

$$2) EFNQm = FFNn-4 (1 + ATD)^{\gamma} + FFNn-3 (1 + ATDm)^{\gamma-1} + FFNn-2 (1 + ATDm)^{\gamma-2} + FFNn-1 (1 + ATDm)^{\gamma-3} + FFNn (1 + ATDm)^{\gamma-4}$$

Donde: γ representa la cantidad de meses que ha comprendido el quinquenio, dividida por 12.

ATDm representa el costo de capital determinado para el quinquenio que está revisando.

FFNn-4, FFNn-3,..., FFNn, representan los flujos de fondos netos anuales corregidos.

$$3) AEQm = EFNQm ATDm / (1 + ATDm) [1 - (1 + ATDm)^{-\alpha}]$$

Donde α es la cantidad de años de concesión que restan hasta la finalización de la concesión.

AEQm representa el valor periódico, anual o no, que los ingresos futuros del concesionario deberían tener como mínimo para remunerar la EFNQm a la ATD del quinquenio m. La anualidad del último año del último quinquenio de la concesión que se establezca en cada revisión quinquenal se determinará como la tercera parte de la respectiva AEQm, debiendo cumplirse además:

$$4) EFNQm = \Sigma (\text{para } t = 0 \text{ a } \alpha-2) [AEQm / (1 + ATDm)^t] + [AEQm/3 (1 + ATDm)^{\alpha-1}]$$

$$5) PE_m = \Sigma (t = 0 \text{ hasta } \alpha-1) FFNt / (1 + ATDm+1)^t = 0$$

Donde: PE posición de equilibrio

m = número de quinquenios transcurridos,

α = cantidad de "años concesión" que restan hasta la finalización del período de concesión.

ATDm+1 = tasa de descuento determinada en la revisión, para el período remanente de la concesión.

FFNt = valor que deberían tener los FFN futuros esperados para que el concesionario recupere los costos operativos, de inversión e impositivos incurridos, así como una remuneración determinada por el costo de capital (ATD).

$$6) \Sigma (t=1 \text{ hasta } 30) FFNt / (1 + ATD1)^t = 0$$

Donde ATD1 es la tasa de costo de capital incógnita, determinada para el primer quinquenio. Los FFNt utilizados son los correspondientes a la oferta originalmente presentada por el concesionario.

$$7) ATD = CD (1 - T) (D / (D + PN)) + CCP (PN/(D + PN))$$

Donde: ATD = tasa de costo de capital para los restantes períodos

CD = costo de la deuda, definido como Rendimiento Stripped Yield to Maturity del Par Bond 2023.

CCP = costo de los capitales patrimoniales, definidos como $CCR = TSR + (\beta_{\text{sector}} * \text{Appatrimonio} * PM)$

Allí, TSR = tasa de los préstamos sin riesgo en dólares, medida por el Rendimiento Stripped Yield to Maturity del Par Bond 2023 (promedio semanal de los últimos tres años anteriores a la revisión).

β_{sector} = promedio semanal de las beta desapalancadas determinadas para el sector del agua en el mercado inglés para los últimos dos años. En el futuro, cuando existan datos latinoamericanos podrá acordarse su modificación.

$$8) \text{Appatrimonio} = \text{Apalancamiento Patrimonial} = D / PN (1 - T) + 1$$

Donde T = tasa de impuestos a las ganancias vigente.

PM = premio de mercado, diferencia de los rendimientos anuales, de los últimos 30 años del mercado de acciones ordinarias en Estados Unidos, con el de bonos de deuda de largo plazo del gobierno de ese país.

D = Deuda.

PN = Patrimonio Neto

Indicadores de Endeudamiento (ID).

$$9) \text{ Indicador Deuda Total / Patrimonio Neto} = DT/PN$$

Donde DT (Deuda Total) = suma en el balance de deuda y cuentas a pagar.

PN (Patrimonio Neto) = suma en el balance de: Capital, Ajuste de Capital, Reserva Legal y Resultados Acumulados.

$$10) \text{ Ratio Deuda a Largo Plazo/Patrimonio Neto} = (DLP/PN)_n$$

Donde DLP (Deuda a Largo Plazo) = valores de balance

$$11) \text{ Ratio Servicio de la Deuda de Largo Plazo} = SDLP_n = (RN + ID + AMD) / (IDL + ADLP)$$

Donde RN = resultado neto en el Estado de Resultados

ID = intereses de la deuda de largo y corto plazo, netos de activaciones, en el Estado de Resultados.

AMD = amortizaciones y depreciaciones en el Estado de Resultados.

IDL = intereses de la deuda de largo plazo.

ADLP = amortizaciones de la deuda de largo plazo en el cuadro de flujo de fondos.

12) Ratio Cobertura de Deuda = $CD_n = IN / (DLP + M + G)$

Donde: IN = en el balance, inversiones acumuladas en bienes de uso e intangibles, netas de depreciaciones acumuladas.

DLP = deuda a largo plazo total en el balance.

M = margen (30% sobre la DLP).

G = garantía del contrato de concesión.

Cuadro 3: Anexo al informe sobre la determinación de los componentes de la exposición financiera neta del primer quinquenio, 1 de mayo de 1993 a 31 de diciembre de 1998 (millones de \$)

Item	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos Netos	234,79	329,71	374,66	393,04	726,80
Costos Operativos	215,26	236,20	241,70	233,65	391,27
Amortizaciones	8,10	7,94	4,59	6,99	13,91
Impuestos	3,46	25,67	38,51	45,72	96,49
Variación de capital de trabajo	120,05	25,18	12,23	-11,33	4,64
Variación activo circulante	69,23	1,91	-2,70	-8,17	1,53
Variación pasivo circulante	45,05	21,01	14,32	-3,00	2,91
Variación de caja mínima	5,77	2,26	0,61	-0,16	0,20
Inversiones	195,73	244,45	213,30	139,75	239,74
Inversiones reguladas	101,50	242,83	343,57	315,87	367,47
Inversiones previstas no realizadas	-0,32	41,34	196,05	241,20	232,77
Plantas cloacales	1,60	18,14	101,82	103,24	32,52
Cuarta cloaca máxima	0,90	19,73	33,68	22,43	0,15
Redes de agua	19,80	-57,23	-10,16	10,70	77,51
Redes de cloaca	-45,06	28,68	12,92	62,43	107,28
Otras inversiones	22,44	32,02	57,79	42,40	15,31
Inversiones previstas no realizadas resolución 81/94	0,00	18,52	2,62	49,32	-1,18
Inversiones realizadas no previstas	0,00	0,00	10,10	87,49	97,82
Bienes de uso e intangibles	29,41	58,98	55,30	26,92	6,04
Plan de retiro voluntario	64,50	2,50	3,00	0,00	0,00
Flujo de fondos netos	-209,50	-159,76	-102,44	-20,75	0,48
ATDoferta = TIR FFN0-30 11,21%					
EFNQ1	-382,67	-262,40	-151,29	-27,56	0,57
EFNQ1 = -823,34					
Nota: los coeficientes de amortización son los regulados					

VIII-Resolución 1111/99 SRN y DS, del 12 de octubre de 1999

La SIGEN había efectuado observaciones al Acta Acuerdo aprobada por SRN y DS 601/99, que era menester introducir. Estas se agregan como Anexo I a la presente Resolución, dando satisfacción a las aclaraciones requeridas. Esta Resolución pone término al proceso de renegociación del Contrato de Concesión, iniciado con el Decreto 149/97, seguido por el Decreto 1167/97 y por la Resolución SRN y DS 1103/98, quedando concluidas todas las cuestiones pendientes habidas entre las partes y restando únicamente la preparación y elevación del texto ordenado de las normas concesionales para su aprobación por el PEN, tal como lo dispone el Decreto 1087/98.

El Anexo I a la Resolución 1111/99, agrega al Anexo VI del Acta Acuerdo del 8 de julio de 1999: “Las tareas que realice el concesionario en el asesoramiento, elaboración de informes técnicos, proyectos y/o ejecución de trabajos en instalaciones de agua o saneamiento que no estén bajo su responsabilidad, deberán cumplirse con independencia operativa y de cuentas, debiéndose trasladar a las tarifas los beneficios que pudieran obtenerse de su ejecución”. Se agrega al Anexo VIII.3 al Acta Acuerdo del 8 de julio de 1999: “En la puesta en ejecución de las modificaciones o

adecuaciones al régimen tarifario establecidas en este Anexo, el ETOSS deberá dar previa intervención a la Comisión de Usuarios creada por resolución ETOSS 38/99.

Los convenios que pudiere realizar el concesionario con los consorcios de copropietarios de la Ley 13512 a los efectos de la facturación unificada de servicios no medidos deberán contar con la aprobación expresa de los propietarios de cada unidad funcional.

Aclárase que el componente SU del cargo SUMA es de \$ 2,01 por bimestre y por servicio hasta la finalización del segundo quinquenio”.

Se agregó al Anexo IV del Acta Acuerdo del 8 de julio de 1999: “La posibilidad de instrumentar un esquema de subsidios como consecuencia del cambio del régimen tarifario a que se hace mención en este anexo, no implica asumir compromiso alguno por parte del Poder Ejecutivo Nacional en propiciar la implementación de subsidio alguno”.

Se agregó al Anexo VIII.2 del Acta Acuerdo del 8 de julio de 1999, punto 13.10.7: “Las sanciones que corresponda aplicar por cortes de servicio deberán ser evaluadas en cada caso atendiendo al tipo de corte, sus consecuencias, la responsabilidad del concesionario y los efectos que pudiere haber tenido el mismo”.

Se modificó el plazo de 5 días corridos contenido en el Anexo I Addenda A del Acta acuerdo del 8 de julio de 1999 para la observación del listado de auditores internacionales, elevando el mismo a 30 días corridos.

Se agregó como numeral 5.2.7.7 del contrato de concesión: “El silencio del concesionario a cualquier requerimiento del Ente Regulador en el plazo que el mismo fije no inferior a cinco días y con la prevención de este artículo, será considerado como aceptación de los hechos involucrados.”

Se agregó al numeral 13.6.3: “El silencio del concesionario, vencido el plazo fijado en el apartado anterior, será considerado como aceptación del incumplimiento que se le impute”.

IX-Decreto 1369/99, BO 29 de noviembre de 1999

Delegó a la SRN y DS la facultad de aprobar el texto ordenado del Marco Regulatorio y del Contrato de Concesión, otorgando en este último intervención al ETOSS en el ámbito de su competencia.

Bibliografía:

Cuadro Regulación Comparada: Exposición de Gustavo Kippes en el Congreso Mundial del Agua, Buenos Aires, Septiembre de 1999.

Decreto 149/97, del 14/02/97, BO 20/02/97.

Decreto 1167/97 del 07/11/97, BO 29/11/97

El tratamiento del Decreto y el Cuadro de determinación del SU están en Gustavo Ferro (1999). Evolución del Cuadro Tarifario de Aguas Argentinas: el financiamiento de las expansiones en Buenos Aires. STD 11, CEER, Buenos Aires, octubre.

Decreto 1087/98, 14/09/98

Resolución 1103/98 SRN y DS, 28 de diciembre de 1998.

Resolución SRN y DS 601/99, 8 de julio de 1999

Resolución SRN y DS 602/99, 8 de julio de 1999

Decreto 1369/99, 29 de noviembre de 1999

Serie Textos de Discusión CEER

Para solicitar alguno de estos documentos o suscribirse a toda la Serie Textos de Discusión CEER, vea las instrucciones al final de la lista. Un listado comprehensivo de la Serie textos de Discusión CEER puede hallarse en nuestro web site.

STD 1. Laffont, Jean Jacques: Llevando los principios a la práctica en teoría de la regulación (marzo 1999)

STD 2. Stiglitz, Joseph: The Financial System, Bussiness Cycle and Growth (marzo 1999)

STD 3. Chisari, Omar y Antonio Estache: The Needs of the Poor in Infrastructure Privatization: The Role of Universal Service Obligations. The Case of Argentina (marzo 1999)

STD 4. Estache, Antonio y Martín Rossi: Estimación de una frontera de costos estocástica para empresas del sector agua en Asia y Región del Pacífico (abril 1999)

STD 5. Romero, Carlos : Regulaciones e inversiones en el sector eléctrico (junio 1999)

STD 6. Mateos, Federico: Análisis de la evolución del precio en el Mercado Eléctrico Mayorista de la República Argentina entre 1992 y 1997 (julio 1999).

STD 7. Ferro, Gustavo: Indicadores de eficiencia en agua y saneamiento a partir de costos medios e indicadores de productividad parcial (julio 1999)

STD 8. Balzarotti, Nora: La política de competencia internacional (septiembre 1999)

STD 9. Ferro, Gustavo: La experiencia de Inglaterra y Gales en micromedición de agua potable (septiembre 1999)

STD 10. Balzarotti, Nora: Antitrust en el mercado de gas natural (octubre 1999)

STD 11. Ferro, Gustavo: Evolución del cuadro tarifario de Aguas Argentinas: el financiamiento de las expansiones en Buenos Aires (octubre 1999)

STD 12. Mateos, Federico, Martín Rodríguez Pardina y Martín Rossi: Oferta y demanda de electricidad en la Argentina: un modelo de ecuaciones simultáneas (noviembre 1999)

STD 13. Ferro, Gustavo: Lecciones del Seminario Proyección de Demanda de Consumo de Agua Potable (noviembre 1999)

STD 14: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Medidas de eficiencia y regulación: una ilustración del sector de distribuidoras de gas en la Argentina (diciembre 1999)

STD 15: Rodríguez Pardina, Martín, Martín Rossi y Christian Ruzzier: Fronteras de eficiencia en el sector de distribución de energía eléctrica: la experiencia sudamericana (diciembre 1999)

STD 16: Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Cambio tecnológico y catching up: el sector de distribución de energía eléctrica en América del Sur (marzo 2000)

STD 17: Ferro, Gustavo: El servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires: privatización y regulación (abril 2000).

STD 18: Celani, Marcelo: Reformas en la industria de las telecomunicaciones en Argentina (junio 2000).

STD 19: Romero, Carlos: La desregulación de la comercialización de electricidad en Inglaterra y Gales (junio 2000).

STD 20: Rossi, Martín: Midiendo el valor social de la calidad de los servicios públicos: el agua.

STD 21: Rodríguez Pardina, Martín: La concesión de Aguas Argentinas. (Noviembre 2000).

STD 22: Rossi, Martín e Iván Canay: Análisis de eficiencia aplicado a la regulación ¿Es importante la Distribución Elegida para el Término de Ineficiencia? (Noviembre 2000)

STD 23: Ferro, Gustavo: Los instrumentos legales de la renegociación del contrato de Aguas Argentinas (1997-99) (Diciembre 2000).

CEER Working Paper Series

To order any of these papers, or all of these, see instructions at the end of the list. A complete list of CEER Working Papers is displayed here and in our web site.

WPS 1. Laffont, Jean Jacques: Translating Principles Into Practice in Regulation Theory (March 1999)

WPS 2. Stiglitz, Joseph: Promoting Competition in Telecommunications (March 1999)

WPS 3. Chisari, Omar, Antonio Estache, y Carlos Romero: Winners and Losers from Utility Privatization in Argentina: Lessons from a General Equilibrium Model (March 1999)

WPS 4. Rodríguez Pardina, Martín y Martín Rossi: Efficiency Measures and Regulation: An Illustration of the Gas Distribution Sector in Argentina (April 1999)

WPS 5. Rodriguez Pardina, Martín Rossi and Christian Ruzzier: Consistency Conditions: Efficiency Measures for the Electricity Distribution Sector in South America (June 1999)

WPS 6. Gordon Mackerron: Current Developments and Problems of Electricity Regulation in the European Union and the United Kingdom (November 1999)

WPS 7. Martín Rossi: Technical Change and Efficiency Measures: The Post-Privatisation in the Gas Distribution Sector in Argentina (March 2000)

WPS 8. Omar Chisari, Martín Rodriguez Pardina and Martín Rossi: The Cost of Capital in Regulated Firms: The Argentine Experience (May 2000)

WPS 9. Omar Chisari, Pedro Dal-Bó and Carlos Romero: High Tension Electricity Network Expansions in Argentina: Decision Mechanisms and Willingness-to-Pay Revelation (May 2000).

WPS 10. Daniel A. Benitez, Antonio Estache, D. Mark Kennet, And Christian A. Ruzzier. Potential Role of Economic Cost Models in the Regulation of Telecommunications in Developing Countries (August 2000).

WPS 11. Martín Rodríguez Pardina and Martín Rossi. Technical Change and Catching-up: The Electricity Distribution Sector in South America

Centro de Estudios Económicos de la Regulación



Solicitud de incorporación a la lista de receptores de publicaciones del CEER

Deseo recibir los ejemplares correspondientes a la serie (marque con una cruz la que corresponda), que se publiquen durante 2000:

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| a) Working Papers Series | (...) impreso | (...) e-mail, formato pdf |
| b) Serie de Textos de Discusión | (...) impreso | (...) e-mail, formato pdf |

Mi nombre es:.....

Ocupación:.....

Domicilio:.....

.....

.....

Firma

Tenga a bien enviar esta solicitud por correo a:

SECRETARIA CEER
Lima 717, 1° piso
C1053AAO Buenos Aires
Argentina

Por fax, al 54-11-43797588

E-mail: ceer@uade.edu.ar